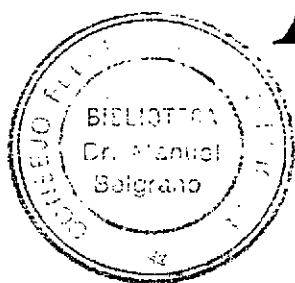


Adelab

Programa de Legislación Ambiental para la Provincia de San Luis

IV Informe Parcial

Evaluación Impacto Ambiental



Dr. Omar Marcelino SAA
1996

0/777
SII
I

INDICE

	<u>Pág.</u>
INTRODUCCION	5
 PARTE I - RECOPIACION E INVESTIGACION	 8
Definiciones.	9
Qué es necesario conocer sobre disposiciones respecto al impacto sobre el medio ambiente. -Trabajo de la Asociación Argentina de Ingenieros Químicos.	10
 1. ANTECEDENTES NACIONALES.	
 1.1. Normativa de EIA vigente a nivel nacional	11
1.1.1. Secretaría de Recursos Naturales y ambiente Humano	11
a) Convenio BICE	12
b) Parques Nacionales	12
1.1.2. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.	13
1.1.2.1. Sistemas de Inversiones Públicas.	13
1.1.2.2. Secretaría de Energía	14
a) Energía Eléctrica	
b) Combustibles	
1.1.2.3. Secretaría de Minería	17
1.1.2.4. Dirección de Vialidad Nacional	18
1.1.2.5. Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento	19
1.1.3. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	19
 1.2. Conclusiones respecto a la normativa nacional analizada	20
 1.3. Presupuestos mínimos en materia de EIA	21
1.3.1. Consideraciones generales.	21

	<u>Pag.</u>
1.3.2.Principios básicos a aplicar	22
1.3.3.Presupuestos mínimos	23
a) Descripción del proyecto o actividad propuesta y sus distintas alternativas	24
b) Descripción del ambiente a ser afectado	25
c)Análisis de los impactos	26
d) Elaboración del PGA del proyecto o actividad propuesta	28
e) Estructura recomendada para la Guía Metodológica General y las Guías Metodológicas Específicas	29
1.3.4.Contenidos mínimos en materia de procedimientos administrativos (a tener en cuenta en las Guías Metodológicas General y Específicas)	30
 ANEXO A - Listado Adicional de Actividades que podrían ser sometidas a EIA	 32
 1.4. Mecanismos de Coordinación Interjurisdiccional.	 35
a) COFEMA	35
b) Pacto Federal Ambiental	36
1.4.1. Coordinación interjurisdiccional en materia de EIA	37
1.4.2. Mecanismos de Cooperación con otros organismos	38
 Proyecto de Ley Nacional sobre EIA. Diputados Muller-Maurette. Comisión de Medio Ambiente Cámara de Diputados de la Nación	 39
 2. ANTECEDENTES PROVINCIALES	 41
2.1. Ley de la Pcia. de Córdoba	41
2.2. Ley de la Pcia de Mendoza	43
2.3. Ley de la Pcia. de San Juan	44
 3. NUEVO CUYO - MERCOSUR	 45

Pag.**PARTE II - CONTACTO CON ORGANISMOS NACIONALES Y
PROVINCIALES**

I. Organismos Provinciales	48
1. Relevamiento en la Pcia. de San Luis	48
2. Pcia. de Córdoba	49
3. Pcia. de Mendoza	50
4. Pcia. de San Juan	51
5. Pcia. de La Rioja	51
6. Entre Ríos	52
II- Organismos Nacionales	
1) Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable	52
2) Comisión de Medio Ambiente-Cámara de Diputados de la Nación	54

PARTE III - ESTRUCTURACION Y ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY.	55
--	-----------

ANEXO I : LISTADO DE ACTIVIDADES A SOMETER A EIA y/o AA	62
--	-----------

Dr. Omar Marcelino Saá
Dra. Gladys Gómez de Saá

INFORME PARCIAL SOBRE TEMA Nº4 -EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

INTRODUCCION:

Como expresa el Dr. Mario Valls, en su obra Derecho Ambiental, más vale prevenir que curar, pero para prevenir, primero hay que observar, diagnosticar y pronosticar, y quien está en mejores condiciones que nadie para pronosticar el impacto ambiental de una actividad es, precisamente, quien proyecta ejecutarla.

Prevenir a terceros, continúa expresando el catedrático, ha sido siempre una obligación ética y jurídica, ya que luego de citar diversos ejemplos, concluye, en el primer Código Rural redactado por el Dr. Valentín Alsina, para la Pcia. de Bs. As., el mero tenedor de un predio, debía denunciar las plagas agropecuarias (art. 280), principio que reiteraron leyes nacionales posteriores, al igual que lo establece la legislación sanitaria que impone la obligación de denunciar determinadas enfermedades.

Esta práctica y obligación jurídica de advertir a terceros, ha dado origen a una obligación ambiental básica que es la de estudiar y difundir los efectos directos e indirectos, individuales y colectivos, mediatos e inmediatos, presentes y futuros de toda actividad susceptible de perjudicar al ambiente.

El derecho norteamericano fue el primero que lo instrumentó orgánicamente, a través de su Ley Nacional del Ambiente de 1970, al fijar la obligación de presentar una Declaración de Impacto Ambiental, para aquellas actividades que afectasen significativamente la calidad del ambiente, en el que conste:

- A) Una nómina de los efectos perjudiciales inevitables.
- b) Otras alternativas para la solución propuesta.
- c) La relación entre el uso a corto plazo del ambiente y la preservación y fortalecimiento a largo plazo de la productividad.
- d) Todo efecto que sea irreversible sobre los recursos.

La experiencia norteamericana ha originado una rica jurisprudencia y ha inspirado a otros sistemas legislativos.

En nuestro país, Constituciones (Río Negro), leyes nacionales, como la de Residuos Peligrosos, Parques Nacionales, Sistema de Inversión Pública, Secretaría de Energía, Minería, Vialidad Nacional, COFAPYS y leyes Provinciales (Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, entre otras) imponen la evaluación del impacto ambiental.

La Ley Nacional 24051, a la que nuestra Pcia. adhirió por Ley 5042, encomienda a la autoridad ambiental la EIA de los RESIDUOS PELIGROSOS (art. 60 inc. g)., y es uno de los requisitos para la autorización de la instalación de plantas de tratamiento o

disposición final de residuos peligrosos es la presentación de un estudio de su impacto ambiental (Art. 34 inc. c).

Además, como también surge de exhaustivos trabajos de investigación efectuados por consultores del PRODIA-Programa de Desarrollo Institucional Ambiental- de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, las EIA, resultan instrumentos fundamentales para el logro de la PROTECCION y CONTROL AMBIENTAL, que permitirá encauzar un desarrollo por los carriles de la sostenibilidad.

El control ambiental apunta tanto a acotar la contaminación del ambiente humano como a preservar y proteger la calidad del ambiente en su sentido más amplio.

En este último tercio de nuestro siglo se ha desarrollado un reconocimiento de la dependencia directa del ser humano con la capacidad del medio ambiente para sostener la vida en el largo plazo. Y la preocupación humana por la conservación de los recursos naturales se ha desarrollado también a medida que ha crecido la certeza de que gran parte de la calidad ambiental es, en sí misma, un recurso no renovable.

En el mundo de nuestros días, los temas del crecimiento económico, la pobreza y la protección ambiental se hallan íntimamente interrelacionados. Mientras que un crecimiento económico perdurable debe basarse en un aprovechamiento racional de los recursos naturales, la pobreza constituye, en sí, una causa y un efecto de los problemas ambientales.

El crecimiento debe proveer los medios tanto para resolver el problema de la pobreza como el de los problemas ambientales. Lo que debe definirse es la dirección y el nivel de dicho desarrollo de manera tal que, satisfaciendo las necesidades básicas de nuestra sociedad actual, no limite el beneficio de las generaciones futuras.

Ello ha implicado dirigir los esfuerzos, en los últimos tiempos, a considerar conceptos tales como la minimización de residuos, el reciclaje de los materiales de descarte o de desecho, el control de la contaminación y la conservación de los recursos. Y estos esfuerzos pueden traer aparejada, concomitantemente, una reducción en los costos de producción.

De lo expuesto más arriba, surge como conclusión inmediata el hecho de que resulta imprescindible rever las acciones y actividades humanas y encauzarlas mediante la utilización de herramientas e instrumentos que aseguren la factibilidad de la habitabilidad de nuestro planeta en el largo plazo.

Para ello se hace necesario una adecuada **Gestión Ambiental (GA)** de tales actividades, en donde, las **Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA)** revisten particular relevancia, como instrumentos clave para el proceso de GA, ya que no sólo contribuyen a optimizar el proceso de toma de decisiones y a asegurar que proyectos o actividades potencialmente sujetos a controversia sean llevados a cabo de forma ambientalmente apropiada y sostenible sino que además coadyuvan con las actividades de información y educación de la comunidad en lo que hace a los aspectos más relevantes de dichos proyectos o actividades.,

Por ello, resulta oportuno considerar en este punto las recomendaciones del Banco Mundial en su informe *"Argentina. Managing Environmental Pollution: Issues and Options"*

(Report N° 14070-AR. Octubre 1995) según el cual el proceso de EIA se haría mucho más transparente si se compararan los costos por daño social con los beneficios de un proyecto o actividad determinados, para lo cual los organismos responsables deberían estimar precios sombra de diferentes daños ambientales a partir de análisis económicos. Ello permitiría que dicho proyecto o actividad resulte económicamente factible recién sólo cuando hayan sido tomadas en cuenta todas las externalidades sociales y ambientales.

Tampoco puede eludirse uno de los principio surgidos de ECO92, el "Principio 17° de la Declaración de Río", donde se establece imperativamente que en todos los países debe emprenderse la evaluación del impacto ambiental, reiterando la temática específicamente en los principios 2°, 12° y 19° de dicha Declaración.

Esta necesidad de contar con legislación al respecto, no sólo surge de mandatos constitucionales de preservar el ambiente -art.41 Constitución Nacional y art. 47 Constitución Provincial-, sino que además se han puesto de manifiesto en diversos Seminarios y Jornadas ambientales organizados en nuestra Provincia - "Taller Pcial. del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación", Taller Pcial de Conservación y Uso de la Biodiversidad"

También ha sido abordado en reuniones del Nuevo Cuyo -Encuentro de Legisladores-San Juan 96-, y en reuniones de titulares de las áreas de Medio Ambiente del Nuevo Cuyo, todo ello para unificar pautas en la región y para su proyección al Mercosur, en donde el país más cercano-Chile- ya cuenta con ésta legislación -Ley 19300 Bases del Medio Ambiente- desde el año 1994.

Por todo lo expuesto, es indudable que debe contarse con la normativa ambiental que haga posible proteger la salud y el bienestar de la sociedad, ya que los incentivos de mercado por sí mismos nunca habrían, probablemente, de tener éxito. Asimismo, de no contarse con legislación específica, en la toma de decisiones de inversión sería muy raro que se tuviera en cuenta la protección a largo plazo de los sistemas que soportan la vida, sistemas que pertenecen a la humanidad en su totalidad y que resultan relevantes para un desarrollo económico sostenido.

El presente trabajo en el que se abordará la Evaluación del Impacto Ambiental, sus antecedentes, aplicaciones, alcances y que culminará con un Proyecto de Ley para la Pcia. de San Luis, consta de 3 partes:

I)-RECOPILACION E INVESTIGACION

II) CONTACTO CON ORGANISMOS NACIONALES Y PROVINCIALES

III) ESTRUCTURACION Y ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY.

I)-RECOPIACION E INVESTIGACION de estudios y antecedentes relativos a la temática y de la legislación de otras Provincias y nacionales.

Se relevaron fundamentalmente las Provincias integrantes del Nuevo Cuyo, continuando con el tratamiento regional-ambiental del tema, conforme a lo que se ha ido consensuando en las reuniones mantenidas por los titulares de las áreas ambientales de San Juan, Mendoza, La Rioja y nuestra Provincia.

De dicho relevamiento, se confirmó que Mendoza, ya legisló sobre el tema cuando dictó su Ley de Preservación del Medio Ambiente en 1992, dedicándole el Capítulo V al Impacto Ambiental, y que además cuenta con reglamentación a través del Dto. N° 2109/94

San Juan por otra parte, ha dictado la Ley N° 6571 de la Evaluación del Impacto Ambiental, en 1994, tomando como modelo la de la Pcia. de Mendoza, aún no la ha reglamentado pero es de destacar, que al día de la fecha se encuentra a la firma del ejecutivo el decreto reglamentario de la mencionada norma.

La Pcial de La Rioja aún no cuenta con ley al respecto.

Por otra parte también se efectuó relevamiento en la órbita nacional, donde se confirmó que aún se carece de ley nacional, que luego de la reforma constitucional del 94, dicha ley entraría en la categoría de "Presupuestos Mínimos", conforme lo establece el art. 41 de la Carta Magna.

Asimismo, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, la Diputada Mabel Muller y el Diputado Fernando Maurette, presentaron a fines del año pasado, el Proyecto de Ley sobre EIA, que inicia su tratamiento parlamentario.

También pudo saberse a través del diálogo con técnicos y asesores de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, dependientes del - PRODIA-, que están en conocimiento de dicho Proyecto, con el que básicamente están de acuerdo, ya que resulta muy necesario contar con ésta norma en el país, en tanto que varios países en el mundo -EE.UU, Alemania, España, Francia, Italia, Holanda, etc.-ya dictaron sus normas hace varios años, y en Latinoamérica (Colombia 1974, México 1988, Venezuela 1991, Perú 1990) y los países del **Mercosur**, Brasil 1981, Paraguay 1993, Uruguay 1994, Bolivia y Chile 1994, ya cuentan con ella:.

Asimismo la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente- propuso para la región un Modelo de Ley de EIA, que fue sometido a consideración del Parlamento Latinoamericano, que lo aprobó con modificaciones, sobre cuya base se elaboró el Proyecto Nacional mencionado que a fines del año pasado ingreso a Diputados.

DEFINICIONES:

A efectos de definir la EVALUACION del IMPACTO AMBIENTAL, se tomaron los diversos conceptos receptados en tareas de investigación, efectuadas por Profesionales del PRODIA - Programa Desarrollo Institucional Ambiental- dependiente de la Secretaría

Estas definiciones resultan, en esencia, prácticamente coincidentes, aunque algunas presentan ligeras variaciones en cuanto a su nivel de detalle.

- Algunas definiciones de los países del MERCOSUR

BRASIL: el *impacto ambiental* es "cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa o indirectamente afecten: a) la salud, seguridad o bienestar de la población; b) las actividades sociales y económicas; c) la biota; d) las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente; y e) la calidad de los recursos ambientales."

PARAGUAY: el *impacto ambiental* es definido como "toda modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos".

Por otro lado, y a los efectos legales, Paraguay define como EIA al "estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o actividad proyectada o en ejecución".

URUGUAY: *Impacto ambiental negativo o nocivo* como "toda alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa o indirectamente perjudiquen o dañen: a) la salud, seguridad o calidad de vida de la población; b) las condiciones estéticas, culturales o sanitarias del medio; y c) la configuración, calidad y diversidad de los recursos naturales".

P.N.U.M.A: El Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la decisión 14/25 de 1987, define a la EIA como "La determinación previa que, con miras a lograr un desarrollo adecuado y sostenible, se hace de los efectos que una actividad dada que se ha planeado realizar podría tener sobre el medio ambiente, cuando por su alcance, naturaleza y ubicación, dicha actividad pueda afectarlo considerablemente"..

-QUE ES NECESARIO CONOCER SOBRE DISPOSICIONES RESPECTO AL IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE-

-Trabajo de la ASOCIACION ARGENTINA DE INGENIEROS QUIMICOS

Traducción de trabajos publicados por la Revista Hydricarbon Processing.

Si bien el enfoque del trabajo se orienta hacia la industria de los hidrocarburos, sus consideraciones son extensibles y aplicables a otros sectores de la producción que accionan sobre el ambiente, pudiendo ser ejemplificativo para nuestro país, que está dando los primeros pasos en la temática.

1. Cuando se requiere un Informe de Impacto?

El 1/1/1970 los EE.UU dan origen al Acta sobre la Política Nacional del Medio Ambiente -NEPA-, que requiere que cada agencia federal confeccione un Informe de Impacto Ambiental, como anticipo de una acción mayor, recomendación o informe que pueda tener un efecto significativo en la calidad del medio ambiente del ser humano.

La norma se aplica a una serie de actividades públicas y privadas, tales como construcción de carreteras, dragados de puertos, rellenos, fumigación a gran escala, construcción de nuevas plantas, etc.

Los Informes de Impacto Ambiental (EIS), representan el corazón del proceso administrativo que intenta asegurar el logro de los objetivos nacionales en materia de medio ambiente.

2. Por que se requiere un EIS?

El Informe de Impacto Ambiental -IES- es el principal mecanismo por el cual la Presidencia del Consejo sobre Calidad del Medio Ambiente, Council on Environmental Quality -CEQ-, coordina la política sobre el medio ambiente, siendo éste el principal rol del CEQ, simultáneamente con el rol de controlar su cumplimiento.

No se prohíbe específicamente ninguna acción, pero se requiere consideración pública o evaluación previa del impacto al ambiente **antes** de que la acción que podría afectar significativamente al ambiente, sea aceptada. Esto incluye la comparación de alternativas y el análisis detallado de todas las opciones, incluyendo la alternativa de no realizar la acción.

3- Cómo se aprueba un EIS

El destino de un proyecto depende del respaldo por parte de varias agencias que basan sus consideraciones en un juego de datos técnicos y la revisión de los temas ambientales, que también depende de un proceso de audiencias donde se realiza la discusión y análisis sobre la información contenida en el EIS.

1- ANTECEDENTES NACIONALES

1.1.- Normativa de EIA en vigencia a nivel nacional

Estudios e investigaciones efectuadas por Consultores del PRODIA.

1.1.1.-Secretaría de Recursos Naturales y ambiente Humano.

.Ley 24051. Residuos Peligrosos

La SRNAH exige realizar estudios de EIA a todos aquellos proyectos de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos que caen bajo el régimen de la Ley 24.051/92.

Se establece, como uno de los requisitos a cumplir por los operadores de plantas de disposición final de residuos peligrosos para su inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, que la solicitud de inscripción sea acompañada del correspondiente estudio de impacto ambiental.

En el Decreto 831/93 se dan los correspondientes términos de referencia a los que deberán ajustarse los estudios de EIA para plantas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

Los objetivos específicos del estudio de EIA correspondiente son:

- a) Estudiar y evaluar los efectos de las plantas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos sobre:
 - * los cuerpos receptores;
 - * las actividades productivas y de servicios actuales y potenciales;
 - * el equipamiento y la infraestructura a nivel local y regional;
 - * los asentamientos humanos y sus áreas territoriales de influencia; y
 - * la calidad de vida de la población involucrada.
- b) En base a la caracterización de dichos efectos y a otras alternativas de desarrollo a nivel local y regional, ponderar el impacto ambiental. En caso que se traten y dispongan residuos con constituyentes tóxicos y ecotóxicos, deben efectuarse las pertinentes evaluaciones de riesgo para la salud humana y para otros organismos vivos.

Los contenidos requeridos al estudio de EIA son:

- * Descripción, objetivos y propósitos del Proyecto.
- * Descripción de la Situación Ambiental actual .
- * Marco legal e institucional vigente.
- * Gestión Ambiental (medidas y acciones de mitigación y prevención de impactos ambientales y riesgos).
- * Identificación y predicción de impactos/riesgos ambientales según las diferentes etapas del Proyecto.

Para la realización de los estudios de EIA se requiere la participación de profesionales idóneos, debidamente especializados en la materia.

a) Convenio con el BCO. de INVERSION y COMERCIO EXTERIOR S.A.-BICE-

Mediante convenio con el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., la SRNAH resulta la encargada de reglamentar las metodologías de EIA y de implementar el Registro de Consultoría Ambiental para todos aquellos proyectos incluidos en el Programa Global de Crédito Multisectorial, declarado de interés nacional mediante Decreto del PEN N° 420/94 y cuyo organismo ejecutor, según el Decreto antedicho, es el BICE.

b) Parques Nacionales.

La Administración de Parques Nacionales, exige la realización de diversos niveles de evaluación ambiental, según su magnitud, a todos los proyectos a emprender dentro del ámbito jurisdiccional de dicho organismo. La APN se reserva el derecho de efectuar Auditorías Ambientales para el caso de emprendimientos y actividades preexistentes.

Estos estudios sirven a la APN para evaluar la factibilidad y conveniencia de ejecutar tales proyectos, minimizar los impactos perjudiciales negativos de obras, actividades o servicios realizados en áreas protegidas y prevenir los que pudieran resultar de los proyectos propios de la APN o que requieran su autorización.

Se efectúa una discriminación de los estudios a realizar, según la intensidad del impacto de la actividad o proyecto, en:

1º) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para los Proyectos de alta incidencia

Para estos estudios se estipula que, previo a su puesta en marcha, deben ser aprobados por el Directorio de la APN. Para ello, dicho Directorio debe nombrar una Comisión Evaluadora Interdisciplinaria, la que debe emitir un informe técnico. Esta EIA debe quedar a disposición del público en general y de otros organismos, para lo cual deben publicarse en periódicos de circulación masiva, a cargo del proponente, los lugares y los plazos respectivos en que ello habrá de hacerse. El informe a presentar debe seguir los siguientes lineamientos:

- * Sumario Ejecutivo
- * Descripción del Proyecto
- * Descripción ambiental del área
- * Impactos ambientales significativos
- * Análisis de alternativas (tecnológicas y de localización, incluida la de "no acción")
- * Plan de Mitigación
- * Plan de Monitoreo (de las medidas mitigadoras)
- * Bibliografía
- * Apéndices
 - Lista de autores
 - Información de base

2º) Informe de Impacto Ambiental (IIA) para los de Incidencia media

Se establece que los IIA serán evaluados por las Direcciones Técnicas de la APN y expertos seleccionados a tal fin, las que deben emitir un informe técnico para su posterior aprobación por parte del Directorio de la AON. Los contenidos de estos IIA deben incluir:

- * Descripción del Proyecto
- * Descripción del ambiente
- * Descripción de las acciones principales causantes de impacto ambiental
- * Plan de Monitoreo y Seguimiento de las acciones menos tolerables

3º) Informe Medioambiental (IMA) para los de Incidencia baja

Se indica que los Informes Medioambientales serán evaluados a través de una Comisión interna integrada por representantes de las Direcciones Nacionales y la Delegación Técnica de la región interesada y que sus contenidos deben incluir:

- * Descripción del Proyecto
- * Descripción del sitio
- * Efectos del Proyecto
- * Recomendaciones para que los impactos ambientales, aunque sean tolerables, puedan minimizarse mediante medidas correctivas de ingeniería o manejo

Todos los estudios deben ser incluidos en el Proyecto correspondiente en forma de documento diferenciado.

Se estipula que los gastos emergentes de las EIA y del funcionamiento de la Comisión Evaluadora, como asimismo los correspondientes al IIA y a los honorarios de los expertos que sean necesarios para su evaluación, deben ser costeados por los responsables de la ejecución del proyecto. La APN fija los honorarios de la Comisión Evaluadora de acuerdo a la magnitud del proyecto de que se trate y es la depositaria de los honorarios de los expertos contratados para evaluar los IIA. Para todo ello, se abre una cuenta especial, quedando un 10% para los gastos administrativos de la APN.

1.1.2.- Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos.

En el ámbito del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos existen varios organismos que están exigiendo EIAs mediante la aplicación de diversas metodologías.

1.1.2.1. Sistema de Inversiones Públicas.

La Ley 24.354/94 crea el Sistema de Inversiones Públicas y establece, para la etapa de Preinversión, la necesidad de realizar estudios de factibilidad o impacto ambiental en el caso de los proyectos enumerados en el Anexo I y de acuerdo a las normas y procedimientos que se indican en el Anexo II.

Sin embargo, el Anexo II fue observado por el PEN debido a su excesiva "complejidad y minuciosidad" mediante Decreto Nº 1.427/94. Según la ley de referencia, la autoridad competente en la materia resultaba la autoridad nacional ambiental.

1.1.2.2. Secretaría de Energía.

a) Energía Eléctrica

La Secretaría de Energía (SE), en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 24.065/91, regula las EIA correspondientes a la generación, transporte y distribución de Energía Eléctrica y los Planes de Gestión Ambiental para la subsecuente administración de tales actividades a través del ENRE.

Mediante diversas resoluciones, la SE implementa acciones y programas de EIA y de Gestión Ambiental por parte de las empresas responsables en los siguientes campos:

- # Obras hidráulicas con aprovechamiento energético
- # Centrales Térmicas Convencionales
- # Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión

Con respecto a las primeras, cabe aclarar que, además de las Resoluciones de la SE N^{os} 475/87 y 718/87, la ley nacional N^o 23.879/90 exige la efectivización, por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), de los estudios de EIA correspondientes a las represas construidas, en construcción o planificadas, nacionales o extranacionales, implantadas o a implantar en territorio argentino que puedan traer aparejadas consecuencias ambientales sobre el mismo. La Autoridad de Aplicación de la ley de referencia resulta ser el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a través de los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Salud y Acción Social o aquel facultado como autoridad nacional en materia de política ambiental, siendo dicho rol llevado a cabo hasta el momento por la SE.

La ley indica que el PEN debe proceder a efectuar, en territorio argentino, la evaluación de las consecuencias ambientales de cada una de las represas construidas, en construcción o planificadas, nacionales o extranacionales, valiéndose para ello del "Manual de Gestión Ambiental para Obras Hidráulicas con Aprovechamiento Energético" aprobado oportunamente por la Secretaría de Energía (SE).

En los otros dos casos antes citados, la SE y el ENRE aplican asimismo los manuales elaborados a tal fin, es decir, el "Manual de Gestión Ambiental de Centrales Térmicas Convencionales para Generación de Energía Eléctrica" y el "Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión".

Con respecto a estos tres manuales cabe hacer dos aclaraciones. En primer lugar, estos manuales fueron elaborados por comisiones integradas por representantes de todos los organismos vinculados con cada uno de los temas tratados por los mismos, es decir, que su aplicación cuenta con el consenso general de las instituciones involucradas en el control de la gestión ambiental de cada una de los emprendimientos o actividades de referencia.

En segundo término, estos manuales constituyen verdaderas guías en las que se hace referencia a los requerimientos ambientales a cubrir para cada una de las etapas del Proyecto (prefactibilidad, factibilidad, proyecto ejecutivo, construcción y operación). Para cada una de ellas se explicitan los objetivos, los resultados esperados y los aspectos metodológicos a encarar para todos y cada uno de los componentes tanto del sistema natural como del sistema socio-económico-cultural.

En lo atinente a las acciones de control ambiental, el ENRE se remite a la legislación ambiental de la jurisdicción territorial en que se encuentre el emprendimiento controlado, normatizando sólo aquellos aspectos ambientales relativos a emisiones u otras afectaciones emanadas de las instalaciones de que se trate.

Los organismos responsables de las obras deben presentar en todos los casos, ante la SE o el ENRE, la EIA de las distintas alternativas planteadas en los proyectos del sector, los estudios ambientales desarrollados en todas las etapas del proyecto y el programa de monitoreo y vigilancia ambiental a desarrollar durante toda la vida útil de la obra, tendiendo a insertar la Gestión Ambiental del Proyecto dentro del marco del desarrollo regional.

En lo que hace a la efectivización de estas EIAs, los Manuales elaborados por la SE y los organismos competentes por ella convocados indican que al finalizar cada etapa de un proyecto los responsables del mismo deben presentar los informes respectivos para su seguimiento y control ante la SE, cuya unidad ambiental actúa en estrecha colaboración con el ENRE.

Queda especificado que los costos asociados a la Gestión Ambiental deben integrar los costos totales de las obras.

El ENRE, una de cuyas misiones es la de "velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad....." aprobó una Guía de Contenidos Mínimos del Plan de Gestión Ambiental (PGA) que cada agente reconocido del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) debe elaborar y aplicar en la operación de las instalaciones a su cargo. Estos Contenidos Mínimos deben incluir:

- * Un Programa de manejo de residuos sólidos y semisólidos, de efluentes líquidos y gaseosos.
- * Un Programa de prevención de emergencias.
- * Un Programa de Monitoreo Ambiental.
- * Las habilitaciones y permisos que correspondan.

Sus áreas técnicas están facultadas para aprobar los PGA que presenten los operadores y para auditar su cumplimiento.

En materia de infracciones, el ENRE considera infracción de los generadores respecto a la protección de los ecosistemas involucrados por su infraestructura física, instalaciones y/u operación de sus equipos (según lo estipulado en la Ley 24.065/91) a toda violación de las normas técnicas previstas en los instrumentos legales vigentes en el área de que se trate.

Todos los agentes autorizados a incorporarse al MEM, por otra parte, deben presentar al ENRE el Diagnóstico Ambiental y los PGA pertinentes establecidos según las Resoluciones de la SE.

Cabe destacar, finalmente, que en lo que hace a las EIA de las represas, el control de las mismas fue reglado en el año 1987 por la SE. Luego, en octubre de 1990 se promulgó la LEY 23.879, la que nombra como autoridad de aplicación a los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Salud y Acción Social "o aquel que en el futuro resultare facultado

como autoridad nacional en materia de política ambiental". ***Como en el momento de sanción de la ley de referencia la SRNAH no existía, se trata de un rol que le compete y que podría reclamar.***

b) Combustibles

Mediante la Resolución SE N° 105/92, ésta aprueba las normas y procedimientos a los que deben ajustarse las empresas u organismos que se hallen a cargo de tales actividades o de la realización de proyectos o ejecución de obras tendientes al desarrollo de las mismas.

Mediante la Resolución SE N° 252/93, se aprueban las guías y recomendaciones de referencia que deben seguir la siguiente secuencia:

1. Evaluación de las condiciones de base.
2. Identificación y cuantificación de los impactos.
3. Propuesta de los aspectos a cubrir en la planificación de la operación o de las acciones a implementar para eliminar o atenuar los impactos identificados.
4. Control de gestión ambiental.

Se indica que para la etapa de Exploración deben cubrirse las dos primeras fases, debiendo ampliarse éstas y cumplirse la 3 y la 4 para la de Desarrollo y Explotación, exigiéndose asimismo la presentación de un informe de contingencias que identifique y evalúe la magnitud de eventuales emergencias ambientales.

Se pone un énfasis particular en los siguientes aspectos:

- * Maximizar el uso de la información válida existente.
- * Adoptar los límites más exigentes cuando exista diversidad de normas.
- * Maximizar el uso de matrices de correlación entre tipo de contaminación y nivel de impacto ambiental.
- * Se da una simbología particular para describir las características de los impactos.

Se estipula que las empresas u organismos responsables deben elevar a la SE, a través de autoridad de aplicación, la información que haga posible el adecuado seguimiento de la protección del medio ambiente natural con respecto a la incidencia de las actividades de referencia.

Mediante la Resolución SE N° 27/93 se crea el Registro de Consultores en Control y Evaluación Ambiental, en el que debe inscribirse toda persona física o jurídica responsable de los estudios ambientales y de monitoreo de obras y tareas establecidos en la Resolución SE N° 105/92. Sus antecedentes deben reflejar su experiencia en materia de estudios similares tanto en el país como fuera del mismo.

Las Resoluciones SE N°s 419/93 y 404/94, por su parte, crean y ordenan el Registro de Empresas y Consultores Independientes Auditores de Seguridad en almacenamientos, bocas de expendio de combustibles, Plantas de Fraccionamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Refinerías de Petróleo.

1.1.2.3. Secretaría de Minería.

La Secretaría de Minería (SM) administra y controla el régimen de inversiones mineras (Ley 24.196/93), exigiendo que todos los proyectos incluyan los estudios de EIA e incentivándolos mediante un régimen de exenciones.

En su Capítulo VII, la ley se establece que las empresas sujetas al régimen de la misma deben constituir una previsión especial a fin de prevenir y subsanar las alteraciones que la actividad minera pueda ocasionar sobre el medio ambiente. Se estipula que la fijación del importe anual de dicha previsión queda a criterio de la empresa, indicándose que se considerará como cargo deducible en la determinación del impuesto a las ganancias hasta una suma equivalente al 5 (cinco) % de los costos operativos de extracción y beneficio. Se indica asimismo que las empresas que se acojan a este régimen deben informar anualmente a la autoridad de aplicación, con carácter de declaración jurada, el importe de la previsión especial que hubieran efectuado y erogado efectivamente.

Se especifica asimismo que, al finalizar el ciclo productivo, los montos no utilizados por la previsión establecida deberán ser restituidos al balance impositivo del impuesto antes mencionado.

Se considera que la finalización del ciclo productivo se produce cuando se agota el yacimiento en explotación aunque, independientemente de ello, se capacita a la autoridad de aplicación para dar por finalizado dicho ciclo, obligando al contribuyente a la restitución al balance impositivo del Impuesto a las Ganancias de los montos de previsión no utilizados, cuando los trabajos se interrumpiesen totalmente por un lapso que exceda a los dos (2) años. Se faculta, no obstante, a la autoridad de aplicación para ampliar dicho plazo por causas debidamente fundamentadas.

La SM informa de todos los estudios de EIA y de los controles ambientales a las autoridades competentes que corresponda, realizándose una fiscalización conjunta.

Como en la República Argentina los recursos minerales son propiedad de las provincias en cuyo territorio se encuentran, la Nación y las Provincias Argentinas suscribieron en mayo de 1993 Acuerdo Federal Minero con el fin de establecer los mecanismos que hacen al desarrollo de la minería en el país y promover adecuadamente su crecimiento.

Entre sus objetivos, el ***Acuerdo Federal Minero*** plantea el de "***proteger al medio ambiente a través de una racional actividad productiva***". Para ello, y en base al Artículo 282 del Código de Minería, el Acuerdo destaca tres tipos de acción en relación a la protección ambiental antes aludida:

- # La ***necesidad de*** cumplimentar, tanto para la actividad pública como privada, ***una declaración de impacto ambiental para las tareas de prospección, exploración, explotación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de minerales.***
- # La implementación de ***nuevas formas de fomento***, como las especificadas en la Ley de Inversiones Mineras, ***a los emprendimientos que favorezcan el medio ambiente***, como puede ser el caso de la forestación de áreas mineras.

- # La **necesidad de** cumplimentar, tanto para la actividad pública como privada, **una declaración de impacto ambiental para las tareas de prospección, exploración, explotación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de minerales.**
- # La implementación de **nuevas formas de fomento**, como las especificadas en la Ley de Inversiones Mineras, **a los emprendimientos que favorezcan el medio ambiente**, como puede ser el caso de la forestación de áreas mineras.
- # El **destino de fondos para un tipo de investigación que induzca a un mayor desarrollo tecnológico y social en proyectos vinculados a la conservación del medio ambiente en la actividad minera.**

Por otro lado, el Acuerdo estipula en su cláusula vigésimo segunda que en materia de desarrollo regional, protección ambiental y aspectos tributarios será el Consejo Federal de Inversiones quién cumplirá tareas de organismo consultivo.

1.1.2.4. Dirección Nacional de vialidad.

Dentro del ámbito de la Subgerencia de Investigación y Desarrollo de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control de la DNV se creó la Sección Impacto Ambiental (Unidad Ambiental) con responsabilidad primaria en la formulación y aplicación de modelos para el análisis del impacto social, económico y ambiental de las obras viales y su articulación con otros medios de transporte.

A través de esta Unidad, la DNV exige las EIA de los corredores viales bajo su jurisdicción. A tal fin, se elaboró, mediante la participación de un equipo consultor, un "Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales", que brinda el marco de procedimiento para la consideración y aplicación de criterios ambientales en la planificación, diseño, construcción y operación de este tipo de obras.

El Manual de referencia se divide en tres secciones:

- * Planificación y Evaluación Ambiental de la Obra Vial: incluye los fundamentos y conceptos necesarios para la incorporación de los aspectos ambientales en la planificación y diseño de la obra vial y contiene los conceptos básicos y metodológicos para la EIA.
- * Gestión Interna: presenta los aspectos relacionados con la Gestión Ambiental del Proyecto y de la Obra Vial, incorporando básicamente el rol de la Unidad Ambiental dentro de la DNV y el proceso de gestión correspondiente. Desarrolla la metodología para realizar la EIA expeditiva de la Obra Vial e indica los pasos a seguir según el resultado obtenido.
- * Gestión Externa: incorpora las consideraciones sobre las medidas de mitigación del impacto ambiental a ser incorporadas en el Pliego de Contratación, presentando asimismo los mecanismos de fiscalización y control.

El Manual debe ser incorporado al Pliego General de Especificaciones Técnicas con el que se contratan y concesionan las Obras Viales, mientras que los resultados de la EIA y las

Medidas de Mitigación de Impactos deben incorporarse al Pliego Particular de Condiciones de cada Obra.

Por otro lado, el Manual diferencia entre *EIA*, cuyos contenidos son, básicamente:

- * Descripción del Proyecto desde el punto de vista de la situación preoperacional del medio potencialmente afectado.
- * Identificación y valoración de los impactos ambientales que puedan producirse.
- * Análisis de alternativas.
- * Implementación de medidas de mitigación.
- * Establecimiento de un Programa de Vigilancia y Recuperación.
- * Especificación de los impactos residuales que tienen lugar después de aplicar las medidas de mitigación.

y ***Declaración de Impacto Ambiental (DIA)***, que es el dictamen resultante del procedimiento administrativo de la EIA, emitido por la Autoridad de Aplicación correspondiente, una vez revisado el proceso de participación pública y el Proyecto objeto de evaluación.

1.1.2.5. Consejo Federal de agua Potable y Saneamiento -COFAPYS-

El Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento (COFAPYS) creó una Unidad Ambiental dentro de su estructura, la que exige estudios de EIA a los proyectos que soliciten ser incluidos en los contratos oportunamente celebrados con el BID y el Banco Mundial dentro del PRONAPAC (Programa Nacional de Optimización, Rehabilitación y Ampliación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado).

Para ello fueron elaborados los "Procedimientos Ambientales para Programas y Proyectos Financiados por COFAPYS", los que siguen, en líneas generales, el marco conceptual, procedimientos, normas y metodologías de EIA recomendadas tanto por el BID como por el Banco Mundial para el tipo de proyectos incluidos en el PRONAPAC. Estas Guías Metodológicas apuntan a:

- determinar los posibles impactos ambientales;
- evaluar las acciones para mitigar los efectos negativos de los eventuales impactos;
- crear metodologías accesibles para la elaboración de los estudios de EIA;
- brindar asistencia técnica a los entes subprestatarios para la realización de las EIAs; y
- acompañar la ejecución de los proyectos.

1.1.3. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Argentina ha adherido al Protocolo de Protección del Medio Ambiente Antártico el que, si bien debe ser tratado por la Cancillería Argentina, por constituir un Tratado Internacional, a través de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, ***se descuenta la participación activa de los organismos competentes de cada una de las Partes. En el caso de Argentina, este lugar corresponde a la SRNAH.***

El Protocolo impone a toda actividad propuesta la realización previa de un estudio de EIA sujeto a procedimientos nacionales apropiados, el deberá contener:

- * una evaluación inicial (que incluye evaluación de alternativas); y
- * una evaluación global (con anticipación de impactos e identificación de medidas de mitigación y control).

Esta EIA global deberá ser puesta a consideración pública y de las Partes a quienes se les otorga un plazo de 90 días para efectuar sus comentarios. Con todas las observaciones recibidas deberá formularse la EIA definitiva que constituirá la herramienta fundamental para la toma de decisiones.

El Protocolo estipula que debe priorizarse la investigación científica y preservarse el valor de la Antártida como zona para la realización de tales investigaciones, incluyendo las esenciales para la comprensión del medio ambiente global.

El Protocolo prohíbe cualquier actividad, excepción hecha de la investigación científica, relacionada con los recursos minerales.

1.2. Conclusiones respecto a la normativa nacional analizada

En el momento actual, las EIA están siendo aplicadas fundamentalmente en el ámbito de la SRNDS y del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos.

- # En materia de responsabilidades, toda la normativa analizada estipula que los estudios de EIA a realizar deben serlo por cuenta y cargo del solicitante.
- # La totalidad de la normativa estudiada establece que los estudios de EIA deben ser llevados a cabo por personas o empresas idóneos y especializados, debidamente habilitados o autorizados. Algunas de ellas, como es el caso del Convenio SRNDS-BICE y de la Dirección Nacional de Combustibles crean un Registro específico para estudios de EIA y AA.

En lo que hace a referencias explícitas a competencias de la SRNDS

- # La Ley 24.354/94 que crea el Sistema de Inversiones Públicas incluye la exigencia de estudios de EIA para ciertos proyectos (aunque los procedimientos establecidos para llevarlos a cabo, descritos en el Anexo II de la ley, fueron observados por el PEN por su excesiva "complejidad y minuciosidad" mediante Decreto N° 1.427/94). **De todas maneras, queda claro que la autoridad competente en la materia es la autoridad nacional ambiental.**
- # La Ley 23.879/90, que reglamenta las EIA de las represas, nombra como autoridad de aplicación a los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Salud y Acción Social "o aquel que en el futuro resultare facultado como autoridad nacional en materia de política ambiental". **Como en el momento de sanción de la ley de referencia la SRNDS no existía, se trata de un rol que le compete y en el que tiene injerencia.**

1.3. Presupuestos mínimos en materia de EIA Lorenzo González Videla (Subprograma DE CONTROL AMBIENTAL especialistas PRODIA).

1.3.1. Consideraciones generales

En virtud del Artículo 41 de la Constitución Nacional reformada, el Gobierno Nacional, a través del organismo de mayor jerarquía en materia ambiental a nivel nacional, la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (**SRNDS**), actualmente denominada **Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible** debe encargarse de dictar las normas que contengan los presupuestos o contenidos mínimos en todo lo referente a protección ambiental, mientras que las provincias deben hacer lo propio con las necesarias normas complementarias.

Se ha hecho referencia asimismo al control ambiental, el que apunta a lograr la protección ambiental tendiendo tanto a acotar la contaminación del ambiente humano (a fin de evitar el deterioro de la salud y el bienestar del hombre) como a preservar y proteger la calidad del ambiente en su sentido más amplio, no sólo por el *valor instrumental* que la Naturaleza significa para la raza humana sino, fundamentalmente, por su propio *valor intrínseco*.

Por otro lado, también se ha comentado la concepción de desarrollo sostenible, cuyo objetivo es el de satisfacer las necesidades básicas de nuestra sociedad actual sin limitar el beneficio de las generaciones futuras. Se ha hecho referencia, asimismo, a que el desafío de esta concepción es el de definir la dirección a tomar y el nivel a alcanzar por este desarrollo que, desde ya, implica dirigir los esfuerzos a la minimización de residuos, al reciclaje de los materiales de descarte o de desecho, al control de la contaminación y a la conservación de los recursos.

Finalmente, se ha visto cómo resulta necesario implementar una adecuada **Gestión Ambiental (GA)** de las acciones y actividades humanas con el objeto de reverlas y encauzarlas a los efectos de poner en marcha el proceso conducente a asegurar la factibilidad de la habitabilidad del planeta en el largo plazo; y cómo la efectivización de las EIA, instrumentos relevantes del Proceso de **GA**, constituyen un primer paso lógico en esa dirección permitiendo considerar, durante el proceso de toma de decisiones, los efectos de ciertas acciones que, de otra manera, no podrían ser tomadas debidamente en cuenta durante el normal desenvolvimiento del mercado de intercambio de bienes y servicios.

Se hizo referencia también al hecho de que la aplicación de tal instrumento de **GA** hace posible la comparación y ponderación de los efectos adversos detectados a través del proceso de **EIA** con las ventajas económicas, sociales, o de cualquier otro tipo derivadas de una acción, actividad o proyecto determinado.

1.3.2. Principios básicos a aplicar

Cualquiera sea el instrumento de política ambiental en el que los presupuestos mínimos en materia de EIA se inscriban, éste debe sustentarse en los principios básicos en que la misma se fundamenta.

En ese sentido, se entiende que los principios básicos de política ambiental en que los presupuestos mínimos de EIA deberían sustentarse deberían ser los de:

subsidiariedad: según el cual la **SRNDS** se hará cargo de la formulación de la política ambiental en la materia, coordinando y supervisando la ejecución de la misma por parte de los demás niveles jurisdiccionales competentes.

Integración de las consideraciones ambientales en el conjunto de toma de decisiones políticas:

según el cual deberá asegurarse una adecuada predicción de los impactos ambientales de cualquier decisión propuesta, desde sus instancias iniciales, teniendo en cuenta: a) el conocimiento científico existente sobre el ambiente a ser intervenido; b) las posibilidades tecnológicas para la aplicación de medidas preventivas, mitigadoras y/o correctivas; c) el contexto económico y d) la opinión del público referente a la decisión propuesta.

libre acceso a la información ambiental por parte del público:

según el cual la población tiene derecho a obtener del Estado toda información no considerada reservada desde el punto de vista legal.

responsabilidad del Estado de informar a la población:

según el cual el Estado debe mantener informada a la población respecto al estado del ambiente y a los eventuales efectos que, sobre aquél, puedan tener las actividades humanas actuales o proyectadas.

participación ciudadana en la gestión ambiental:

según el cual la población tiene el derecho de ser consultada y de actuar colectiva o individualmente en defensa de sus derechos ambientales.

seguridad ambiental:

según el cual deben cuantificarse y ponderarse los riesgos actuales y potenciales para el ambiente derivados de las acciones propuestas y en curso en relación a los beneficios a obtener de las mismas en el corto, mediano y largo plazo.

valorización económica del ambiente y de sus recursos naturales:

según el cual: a) el generador de efectos perjudiciales para el ambiente debe hacerse cargo de los costos de las acciones preventivas, correctivas y/o mitigadoras, pudiendo trasladar esos

costos a los precios de los bienes y servicios producidos; b) el usuario de esos bienes y servicios debe pagar la totalidad de los costos derivados de la producción de aquéllos (uso y renovación de los recursos naturales, disposición final adecuada de desechos y preservación de la capacidad de carga del ambiente intervenido) y c) deben incorporarse los factores ambientales en la elaboración de las cuentas patrimoniales del Estado.

*responsabilidad civil ambiental:*

según el cual deben garantizarse sistemas jurídicos de indemnización a la población afectada, tanto en su salud como en su propiedad, por daños provocados a través del ambiente.

*conservación de la diversidad biológica:*

según el cual debe garantizarse a perpetuidad la diversidad genética, de las especies y de los ecosistemas, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y el uso sostenible de los recursos.

*preservación de la estabilidad climática:*

según el cual deben limitarse las emisiones que contribuyan al efecto invernadero, debiendo investigarse y monitorearse el comportamiento climático y sus efectos adversos sobre la salud de la población, la propiedad y el ambiente adoptándose, por otra parte, medidas mitigadoras de tales efectos.

*restricción nuclear:*

según el cual, para la autorización de la instalación de usinas nucleares, las Provincias en que aquéllas se localicen deben exigir estudios de EIA e informes económicos comparativos de costo-beneficio con energías alternativas.

1.3.3. Presupuestos mínimos

Los principios que, en materia de procedimientos administrativos y metodológicos, deberían considerarse como presupuestos mínimos ya sea dentro del contexto de un instrumento legal nacional de Política Ambiental o de Impacto Ambiental a elaborarse en el futuro, deberían cubrir los objetivos e incluir los contenidos que se enuncian a continuación.

Presupuestos mínimos en cuanto a proyectos y actividades a someter a EIA y organismos nacionales con responsabilidad primaria en cada caso

En lo atinente a los proyectos y/o actividades que deberían ser sometidos a EIA, se entiende que los presupuestos mínimos deberían consistir en un listado mínimo que, en este caso, se entiende debería coincidir con el de aquéllas a las que la Ley Nacional 24.354/94 de Inversiones Pública exige ya la realización de tal evaluación.

Dicho listado concuerda, por otro lado, con el de la Ley Nacional 24.197/93 de Impacto o Factibilidad Ambiental (vetada oportunamente por el Poder Ejecutivo) y con el listado de proyectos y/o actividades a los que la Directiva 85/337/CE de la Comunidad Europea exige EIA sin necesidad de evaluar la procedencia de aplicar o no tal instrumento de GA. Cabe destacar que la Comunidad Europea, por su parte, seleccionó estas actividades en base a los listados oportunamente efectuados por el Instituto Batelle de los EE.UU.

En el **Anexo A** se presenta, por otra parte, un listado adicional, cuya sujeción a EIA quedaría a consideración de la **SRNDS** y/o de los organismos nacionales o provinciales competentes, según fuera el caso.

Se entiende que una coincidencia entre el listado mínimo de proyectos y/o actividades a ser sometidos a EIA que fijaría una futura Ley Nacional de Política Ambiental o de Impacto Ambiental y el ya fijado por la Ley Nacional de Inversiones Públicas coadyuvaría a la aplicación de una política de protección ambiental coherente, adecuadamente compatibilizada y articulada.

Presupuestos mínimos en cuanto a los procedimientos metodológicos de los estudios de EIA (contenidos mínimos de las Guía Metodológicas de carácter general y específico)

En este caso, los presupuestos mínimos se traducen en lo que puede describirse como pasos metodológicos básicos de un estudio de EIA y en lo que las legislaciones hacen referencia, generalmente, como contenidos mínimos a incluir en un estudio de esta naturaleza.

El conjunto de estos presupuestos mínimos deberá ser recogido por la Guía Metodológica General a elaborar por la **SRNDS**, debiendo atenerse a los mismos las Guías Metodológicas Específicas a confeccionar (algunas de las cuales ya han sido elaboradas) por los organismos nacionales con responsabilidad primaria en cada uno de los proyectos o actividades a someter a EIA según se describe en el punto anterior.

En cuanto a los contenidos mínimos a incluir en un estudio de EIA, estos deberían, fundamentalmente, comprender:

a) Descripción del proyecto o actividad propuesta y sus distintas alternativas

En este punto debe efectuarse una cuidadosa descripción de la actividad o proyecto considerados de acuerdo a lo que indiquen la Guía Metodológica General a elaborar por la **SRNDS** y las Guías Metodológicas Específicas elaboradas o a elaborar por los distintos organismos nacionales competentes.

Se entiende, de todas maneras, que la información mínima a suministrar debería contener:

- * Descripción, objetivos y propósitos del proyecto o actividad.
- * Breve descripción del área de localización y de la extensión de la misma.

- * Descripción de las distintas operaciones y procesos llevados a cabo, aspectos constructivos, relaciones funcionales, diagramas de flujo, etc.
- * Insumos requeridos para las etapas de construcción y operación.
- * Exigencias previsibles respecto al uso de otros recursos naturales (combustibles, aguas, etc.).
- * Residuos a verter durante su funcionamiento.
- * Estimación de las emisiones de materia o energía resultantes de su funcionamiento.

Debe describirse asimismo la opción de "no acción", es decir, se debe proceder a describir cómo evolucionaría el ambiente de no implantarse el proyecto o actividad propuesta.

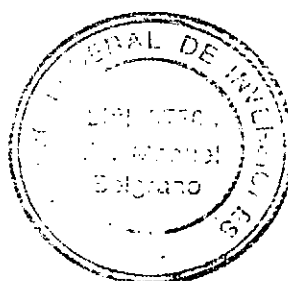
b) Descripción del ambiente a ser afectado

En primer término, debe determinarse el área de influencia del proyecto o actividad propuesto en base a los alcances de las eventuales afectaciones que puedan producirse como consecuencia directa de sus características específicas.

El nivel de detalle de la caracterización a efectuar dependerá de lo que estipulen las correspondientes Guías Metodológicas, aunque resultaría conveniente que ésta no se extienda más allá de lo necesario y suficiente como para que puedan comprenderse los efectos a producir por el proyecto o actividad en los distintos componentes del medio, debiendo ponerse mayor énfasis en aquéllos aspectos ambientales que sean susceptibles de verse incididos con mayor nivel de relevancia.

Esta caracterización del ambiente debe incluir tanto los aspectos del medio natural (biogeofísico) como del medio antrópico (socio-económico-cultural). En el primer caso deberían considerarse, entre otros:

- * clima;
- * suelos;
- * geología y geomorfología;
- * topografía;
- * sismicidad;
- * hidrología y geohidrología;
- * calidad y usos del agua;
- * calidad del aire;
- * flora y fauna;
- * especies críticas;
- * áreas de reserva;
- * paisaje;
- * patrimonio natural, etc.



En el segundo caso, por su parte, deberían incluirse los siguientes aspectos:

- * usos del suelo urbano y rural;

- * ordenamiento territorial;
- * aspectos poblacionales;
- * niveles de pobreza y ocupación;
- * empleo;
- * actividades productivas (primarias, secundarias y terciarias);
- * infraestructura (vial y de transporte, sanitaria, educativa, de salud, de otros servicios, etc.);
- * generación de expectativas por la implantación del proyecto o actividad;
- * aspectos arqueológicos y paleontológicos;
- * patrimonio histórico y cultural;
- * paisaje urbano; etc.

La descripción del ambiente a ser afectado debe completarse con una identificación y caracterización detallada de la legislación ambiental vigente en el área de emplazamiento del proyecto o acción propuesta, identificándose debidamente además los organismos responsables de su aplicación y control.

En base a la caracterización efectuada surgirán los problemas ambientales actuales más relevantes del área de emplazamiento del proyecto o actividad propuesta; situaciones críticas, conflictos, disfuncionalidades, etc.

c)Análisis de los Impactos

Debe efectuarse en esta etapa una discusión abarcativa de los principales impactos ambientales del proyecto o actividad propuesta.

Para ello, deben describirse, esencialmente, los siguientes aspectos:

- # los efectos adversos que resulten inevitables de implantarse el proyecto o actividad propuesta;
- # la relación entre los usos a corto plazo del ambiente y el mantenimiento y mejoramiento de la productividad a largo plazo; y
- # cualquier compromiso de recursos que resulte irreversible o irrecuperable de implementarse el proyecto o actividad propuestos.

Entre los factores más importantes a considerar en este análisis de impactos, deberían incluirse, por otra parte:

- * los efectos directos del proyecto o actividad (que suceden en las mismas condiciones de espacio y tiempo del mismo);
- * los efectos indirectos del proyecto o actividad (aquellos que ocurren más tarde en el tiempo o a una distancia que excede el área de influencia pero que de todas formas resultan previsibles, como es el caso, por ejemplo, de un desarrollo inducido a producirse como consecuencia de la implantación de la acción propuesta);
- * las características de los impactos en cuanto a:

- su carácter genérico: si resulta **beneficioso o perjudicial**.
- su carácter temporal: a) si se presenta de forma intermitente o continua pero durante un lapso limitado de manifestación (**temporario**); b) si se produce de manera continua o, teniendo un efecto intermitente, éste no finaliza nunca (**permanente**).
- su carácter espacial: a) si se produce en un área de ocurrencia limitada a un estrecho entorno del foco de origen (**localizado**); b) si se hace notar en una zona más o menos extensa con o sin solución de continuidad (**distribuido**).
- su reversibilidad: de acuerdo a las posibilidades de retomar a las condiciones originales por acción de mecanismos naturales.
- su magnitud: valorando el efecto del proyecto o actividad en tres niveles, elevado, medio o bajo (en lo posible utilizando métodos cuantitativos, utilizando variables o indicadores que puedan ser expresados en valores numéricos).
- * los eventuales efectos del medio sobre el proyecto o actividad;
- * el nivel de incertidumbre asociado a las anticipaciones efectuadas;
- * los eventuales conflictos que podrían producirse entre la acción propuesta y los objetivos de diversas legislaciones ambientales vigentes en el área de emplazamiento de dicha acción;
- * la identificación de las eventuales medidas mitigadoras, correctivas y/o de control necesarias para contrarrestar los impactos adversos o perjudiciales de mayor relevancia; y
- * la identificación de los indicadores y componentes básicos a incluir en el **Plan de Gestión Ambiental (PGA)** del proyecto o actividad (vigilancia, monitoreo, capacitación de recursos humanos, comunicación social, educación ambiental, etc.).

En la definición del Proyecto Ejecutivo de la acción propuesta deben ponderarse cuidadosamente los impactos en función de los diversos sitios de emplazamiento, características de diseño y/o de funcionamiento, tecnologías a emplear, posibles.

En lo referente a la metodología a emplear para la evaluación de los impactos, ésta debería quedar a criterio del proponente del proyecto o actividad o, en todo caso, ser acordada entre éste y el organismo competente directamente involucrado, dependiendo de lo que se exija en las Guías Metodológicas a elaborar.

Como entre las metodologías más utilizadas para la efectivización de las EIA se encuentran las de:

- * Coberturas o transparencias;
- * Listados temáticos ;
- * Matrices; y

- * Redes

d) Elaboración del PGA del proyecto o actividad propuesta

Según el nivel de detalle que exijan las Guías Metodológicas General y Específicas a elaborar o ya elaboradas, debe procederse en este punto a la elaboración del **Plan de Gestión Ambiental (PGA)** de la acción propuesta en base a la identificación de las medidas e indicadores identificados en el punto anterior.

El PGA a elaborar debería contener, como mínimo:

Para la etapa previa al Proyecto Ejecutivo

Desarrollo preliminar del PGA:

- * Identificación de las medidas mitigadoras, preventivas y/o correctivas para las etapas de construcción y operación.
- * Ajuste de sus costos asociados.
- * Identificación de las medidas que tiendan a potenciar o a optimizar los efectos beneficiosos del proyecto o actividad propuestos.
- * Ajuste de sus costos asociados.
- * Identificación preliminar de necesidades de relocalización, compensación y/o indemnización.
- * Identificación preliminar de los contenidos a incluir en el Programa de Vigilancia, Monitoreo y Control.
- * Ajuste de sus costos asociados.
- * Identificación preliminar de los contenidos a incluir en el Programa de Capacitación Ambiental de Recursos Humanos.
- * Ajuste de sus costos asociados.
- * Identificación preliminar de los contenidos a incluir en el Programa de Comunicación Social y Participación Comunitaria.
- * Ajuste de sus costos asociados.

Para la etapa de Proyecto Ejecutivo

Definición del PGA del proyecto o actividad:

- * Definición de las medidas mitigadoras, preventivas y/o correctivas a implantar durante las etapas de construcción y operación necesarias para contrarrestar los efectos adversos o perjudiciales del proyecto o actividad propuestos.
- * Definición de las medidas de optimización o potenciación de los efectos beneficiosos del proyecto o actividad propuestos a implantar durante las etapas de construcción y operación.
- * Desarrollo de medidas a tomar y de procedimientos a seguir durante la etapa de clausura del proyecto o actividad propuestos.
- * Desarrollo y definición del Plan de Vigilancia, Monitoreo y Control que incluya:

- identificación y definición de los indicadores a controlar;
- frecuencias y lugares o áreas de recolección de muestras o encuestas;
- métodos de análisis de información de campo y procedimientos de procesamiento de la misma;
- información sistemática y periódica de los resultados.
- * Definición del Programa de Capacitación Ambiental de Recursos Humanos a fin de lograr la necesaria concientización del personal que participará en las etapas de construcción y operación del proyecto o actividad.
- * Definición del Programa de Comunicación Social y de Participación Comunitaria que haga posible una permanente y consciente participación de la comunidad involucrada durante toda la vida útil del proyecto o actividad.
- * Definición del Programa de Relocalizaciones, Compensaciones y/o Indemnizaciones a llevar a cabo para la implantación del proyecto o actividad. El Programa deberá incluir los correspondientes cronogramas de aplicación debidamente compatibilizados con el cronograma del proyecto o actividad, de manera que la etapa de construcción pueda ser encarada una vez cumplimentado este Programa.
- * Elaboración del presupuesto del **PGA** e incorporación del mismo al presupuesto general del proyecto o actividad.

Para la etapa de construcción

- # Puesta en marcha del **PGA** del proyecto o actividad y ajuste del mismo según las necesidades que se verifiquen tanto en base a los ajustes de la caracterización ambiental y de la **EIA** como de los resultados de la propia puesta en marcha.

Para la etapa de operación:

- # Seguimiento y ajuste del **PGA** mediante la realización periódica y permanente de **Auditorías Ambientales**.

e) Estructura recomendada para la Guía Metodológica General y las Guías Metodológicas Específicas

La Guía Metodológica General y las Guías Metodológicas Específicas deberían desagregar los requerimientos arriba explicitados en tres etapas, una previa a la instalación o construcción del proyecto o actividad, otra de instalación o construcción y una última de operación.

Para cada una de estas etapas, una vez presentados y aprobados los estudios de **EIA** correspondientes, deberían otorgarse los respectivos licenciamientos, a saber:

- # **Licencia previa (LP):** Corresponde a la fase preliminar de planificación del proyecto o actividad y contiene los requisitos básicos a cumplir en las etapas de localización, instalación y operación, teniendo en cuenta la planificación municipal, provincial o nacional de uso del suelo.

- # **Licencia de Instalación (LI):** Autoriza el inicio de la instalación o construcción, de acuerdo a las especificaciones precisas del Proyecto Ejecutivo aprobado;
- # **Licencia de Operación (LO):** Autoriza, luego de las verificaciones necesarias, el inicio de la actividad y el funcionamiento de sus equipos, mecanismos y procedimientos de control ambiental de acuerdo con lo previsto en las LP y LI.

1.3.4. Contenidos mínimos en materia de procedimientos administrativos (a tener en cuenta en las Guías Metodológicas General y Específicas)

En este caso, los presupuestos mínimos deberían comprender una serie de pasos que se complementen con los pertinentes presupuestos mínimos metodológicos antes citados, conformando el núcleo básico del proceso de EIA.

Primer paso: Presentación de la propuesta

El proponente de una acción, proyecto o actividad determinado debería hacer su presentación ante el organismo competente que corresponda. En dicha presentación, además de efectuar la identificación precisa de sus titulares, los titulares del predio y los responsables de su ejecución, debería describir:

- * la actividad o proyecto sometido a consideración
- * las áreas de emplazamiento y, eventualmente, de influencia, de dicho proyecto o actividad
- * de manera somera, los impactos ambientales más relevantes visualizables "a priori" a producirse como consecuencia de la implementación del proyecto.

En base a esta información, el organismo competente debería, en primer lugar, determinar la viabilidad de implementar el Proyecto o actividad de acuerdo a la magnitud del mismo, a sus implicancias ambientales, a la localización de su sitio de emplazamiento y/o a una combinación de todos estos factores.

Una vez definida la viabilidad del mismo, el organismo competente debería determinar la necesidad o no de efectuar una EIA, pudiendo solicitar para ello la intervención de la SRNDS.

En el caso de las actividades comprendidas en el listado mínimo enumerado en 4.2., los alcances de los estudios de EIA estarían fijados por las Guías Metodológicas General y Específicas a elaborar.

De tratarse de una actividad no enumerada en el punto anterior pero que, a criterio del organismo competente, requiere la realización de este tipo de estudios, los alcances de los mismos deberían ser especificados por dicho organismo.

En esta etapa el organismo competente podría convocar, de entenderlo necesario, a otras instituciones involucradas con el tema motivo del estudio.

Segundo paso: Presentación de la EIA y convocatoria pública

En esta etapa debería tener lugar la realización de los estudios de EIA por parte del proponente de acuerdo a lo requerido por la Guía Metodológica General y las Guías Específicas a elaborar.

Debe efectuarse la EIA de acuerdo con el nivel de desarrollo y desagregado que indiquen tanto la Guía Metodológica General como las Guías Metodológicas específicas a elaborar o ya elaboradas.

Una vez presentada esta EIA por parte del proponente, el organismo competente debería proceder a efectuar una convocatoria general para la participación pública e institucional a los efectos de recabar sus comentarios y/o propuestas.

Esta convocatoria se debería efectuar utilizando los procedimientos de participación que el organismo competente estipule en las Guías Específicas a elaborar. Entre los medios habitualmente empleados se hallan:

- * la realización de audiencias públicas;
- * la publicación de una declaración mínima sobre las características más salientes del proyecto o actividad en un periódico de circulación masiva o en el Boletín Oficial por un período determinado (no más de cinco días seguidos) convocando al público interesado a concurrir al organismo competente a consultar la EIA y remitir posteriormente sus comentarios; o
- * una convocatoria anunciándole a todos los interesados que se pone la EIA a su disposición para su consulta en un lugar y en horarios claramente estipulados.

Todo este mecanismo de consulta, cualquiera sea la forma que se adopte, debería ser efectuado por cuenta y cargo del proponente.

Por otra parte, los comentarios, pedidos de aclaración, documentación complementaria, etc. que acerquen tanto la población involucrada como los demás organismos interesados, organizaciones intermedias, no gubernamentales, etc., deberían ser dirigidos al organismo nacional competente, el que se encargaría de hacérselo llegar oportunamente al proponente, conjuntamente con sus propios comentarios.

Tercer paso: Presentación del documento final

Una vez recibidos los comentarios y documentación adicional por parte del proponente, éste debería proceder a revisar su estudio de EIA, incorporando todos aquellos aspectos que no hubieran sido total o parcialmente considerados en el documento anterior y profundizando aquellos otros que resulten de mayor relevancia.

Una vez efectuada la revisión y profundización, el proponente debería proceder a confeccionar el documento final, el que debería incorporar como anexos los documentos, informes, actas de audiencias públicas (de haber tenido éstas lugar), etc. que hayan sido aportados durante la convocatoria pública.

Finalmente, el proponente debería presentar ante el organismo competente este documento final.

Cuarto paso: Aprobación o rechazo de la EIA

En esta etapa, el organismo competente debería proceder a estudiar la EIA presentada, procediendo a posteriori a:

- * Aprobar directamente la EIA mediante el documento correspondiente.
- * Solicitar información complementaria y/o las modificaciones que estime convenientes, procediendo una vez cumplido ello a la correspondiente aprobación.
- * Rechazar fundamentadamente la EIA.

Una vez decidida la aprobación de la EIA, el organismo competente podría proceder a emitir el documento de aprobación, acondicionamiento o rechazo respectivo.

El documento conformado por el documento definitivo de la EIA y el documento público en el que consten los fundamentos de su revisión, aprobación, acondicionamiento o rechazo podría ser denominado (al igual que en el caso de la NEPA de EE.UU., de la legislación paraguaya o de la Dirección Nacional de Vialidad) **Declaración de Impacto Ambiental (DIA)**.

Otra posibilidad es la de, siguiendo lo establecido en la "Guía Ambiental General para Proyectos de Inversión" incluidos en el Convenio SRNDS-BICE, aprobada mediante **Resolución SRNDS N° 501/95**, denominarlo **Dictamen**.

Una vez publicada en el Boletín Oficial, la DIA debería ser enviada a la SRNDS a los efectos de su homologación y registro por parte de ésta.

Quinto paso: Seguimiento del proyecto o actividad

A continuación, el proponente debería proceder a incluir en los documentos licitatorios todos los compromisos asumidos en materia ambiental para el proyecto o actividad, haciendo referencia explícita a la DIA en los pliegos licitatorios.

El organismo competente debería efectuar un seguimiento del proyecto o actividad mediante la realización periódica y permanente de **Auditorías Ambientales**, por sí o por terceros, que permitan verificar el adecuado cumplimiento del **Plan de Gestión Ambiental** y de los ajustes de la EIA comprometidos para tal proyecto o actividad.

Estas Auditorías Ambientales a efectuar por los organismos deberían ser decrecientes en el tiempo ya que la tendencia debería ser la de promover sistemas de autogestión por parte de las empresas.

Los organismos deberían, por su parte, mantener informada periódicamente a la SRNDS acerca de los resultados obtenidos.

ANEXO A - LISTADO ADICIONAL DE ACTIVIDADES QUE PODRIAN SER SOMETIDAS A EIA

SECTOR AGRICOLA

- # Proyectos de ordenamiento rural.
- # Proyectos mediante los que se destina a una explotación agrícola intensiva a terrenos no cultivados o semicultivados.
- # Proyectos de hidráulica agrícola.

SECTOR DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

- # Extracción de turba.
- # Perforaciones en profundidad:
 - * geotérmicas.
 - * para almacenamiento de residuos nucleares.
 - * para abastecimiento de agua a poblaciones de más de 200 habitantes.
- # Extracción de minerales diferentes a los metálicos y energéticos como mármol, arena, grava, pizarra, sal, fosfatos, potasa.
- # Extracción de petróleo y gas natural.
- # Extracción de minerales metálicos.
- # Extracción de pizarras bituminosas.
- # Extracción a cielo abierto de metales diferentes a los metálicos y energéticos.
- # Instalaciones de superficie para la extracción de hulla, petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas.
- # Fábricas de coque.
- # Instalaciones para la fabricación de cemento.

SECTOR ENERGETICO

- # Instalaciones industriales para la producción de energía eléctrica, vapor y agua caliente (diferentes de las enunciadas en el Listado Mínimo).
 - # Instalaciones industriales para la conducción y distribución de gas, vapor y agua caliente.
 - # Transporte de energía eléctrica mediante líneas de alta tensión.
 - # Almacenamiento aéreo de gas natural.
 - # Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.
 - # Almacenamiento aéreo de combustibles fósiles.
 - # Instalaciones para la producción o el enriquecimiento de combustibles nucleares.
-
- # Instalaciones para la reelaboración de combustibles nucleares irradiados.
 - # Instalaciones para la recolección, tratamiento y disposición final de residuos radioactivos (no incluidas en el Listado Mínimo).

Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.

SECTOR INDUSTRIAL

a) Elaboración de metales

- * Fábricas siderúrgicas incluidas fundiciones, forjas, traillerías y laminadoras (salvo las enunciadas en el Listado Mínimo).
- * Instalaciones de producción incluidas la fusión, afinación, estirado y laminado de metales no ferrosos, salvo metales preciosos.
- * Embutido y corte de piezas de grandes dimensiones.
- * Tratamiento de superficie y revestimiento de metales.
- * Calderería, construcción de depósitos y otras piezas de chapa.
- * Construcción y ensamblado de automóviles; construcción de motores.
- * Astilleros.
- * Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.
- * Construcción de material ferroviario.
- * Embutido de fondo mediante explosivos.
- * Instalaciones de calcinación y sintetizado de minerales metálicos.

b) Fabricación de vidrio.

c) Industria química

- * Tratamiento de productos intermedios y fabricación de productos químicos (no incluidos en el Listado Mínimo).
- * Fabricación de plaguicidas y productos farmacéuticos, pinturas y barnices, peróxidos.
- * Instalaciones de almacenamiento de petróleo, productos petroquímicos y químicos

d) Industria alimenticia

- * Industria de grasas vegetales y animales.
- * Fabricación de conservas de productos animales y vegetales.
- * Fabricación de productos lácteos.
- * Cervecerías y malterías.
- * Fábricas de jarabes.
- * Mataderos y frigoríficos.
- * Fábricas de harina y de aceite de pescado.
- * Fábricas de féculas industriales.
- * Fábricas de azúcar.

e) Industrias textil, del cuero y de la madera y el papel

- * Fábricas de lavado, desengrasado y blanqueado de lana.
- * Fabricación de aglomerados y maderas enchapadas.

- * Fabricación de pasta de papel, papel y cartón.
- * Teñido de fibras.
- * Fábricas de producción y tratamiento de celulosa.
- * Curtiembres.

f) Industria del caucho

- * Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.

SECTOR INFRAESTRUCTURA

- # Proyectos de ordenamiento urbano.
- # Construcción de carreteras, puertos y aeródromos (no incluidos en el Listado Mínimo).
- # Obras de canalización, regulación hidráulica y dragado de cursos de agua.
- # Instalaciones para el almacenamiento de agua.
- # Subterráneos.
- # Instalación de oleoductos, gasoductos y grandes acueductos.
- # Puertos turísticos, complejos vacacionales y hoteleros.
- # Proyectos de agua potable y desagües cloacales.
- # Instalaciones de tratamiento y/o disposición final de residuos domésticos e industriales (no incluidas en el Listado Mínimo).

OTROS PROYECTOS

- # Almacenamiento de chatarra.
- # Pistas permanentes de carrera y prueba de automóviles y motocicletas.
- # Bancos de pruebas de motores, turbinas y reactores.
- # Fabricación de fibras minerales artificiales.
- # Fabricación, acondicionamiento, carga o llenado de cartuchos, de pólvora y explosivos.

1.4. Mecanismos de coordinación Interjurisdiccional

En lo que hace a la coordinación Nación-Provincias, la **SRNDS** viene trabajando desde su creación en una reorganización institucional que permita lograr la implementación de una política nacional de medio ambiente dentro de un sistema nacional que resulte más transparente y eficaz.

A continuación, se describen los pasos más importantes dados en ese sentido.

a) El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)

El **COFEMA**, del cual forman parte todos los estados provinciales, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, representado por la **SRNDS**, es un organismo permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los estados miembro cuyos objetivos son:

- * Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes, prestando particular atención a la escala en que se está trabajando (local, provincial, regional, nacional, internacional).
- * Coordinar estrategias y programas de gestión ambiental regionales y nacionales, propiciando políticas de concertación como modo permanente de accionar, con todos los sectores de la nación involucrados en la problemática ambiental.
- * Formular políticas de utilización conservante de los recursos ambientales.
- * Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con equidad social en armonía con el medio ambiente.
- * Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección y/o preservación del ambiente debe ser compartida entre comunidad y estado.
- * Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental tanto en la Nación como en las provincias y los municipios.
- * *Exigir y controlar la realización de **estudios de impacto ambiental** en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales.*
- * Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el nivel educativo formal como en el no formal, tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población.
- * Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos, propiciando la unificación de variables y metodologías para el monitoreo de los recursos ambientales en todo el territorio nacional.
- * Constituir un banco de datos y proyectos ambientales.
- * Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales.

b) El Pacto Federal Ambiental

En de julio de 1993 la **SRNAH** elaboró el **Pacto Federal Ambiental** cuyos objetivos son los que a continuación se enumeran:

- # De manera primordial, la promoción de políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, las que habrán de lograrse

mediante el establecimiento de Acuerdos Marco entre los Estados Federados y entre estos últimos y la Nación. Ello, a su vez, con el propósito de agilizar y hacer más eficientes las acciones de preservación ambiental en base a los postulados emanados del "Programa 21" aprobado en la **Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD '92)**.

- # A nivel provincial, la promoción de una unificación y/o coordinación de todos los organismos con incumbencia en la temática ambiental, tendiendo a que la fijación de políticas de Recursos Naturales y Medio Ambiente se concentren en el máximo nivel jerárquico posible.

En otro orden de cosas, los estados signatarios asumirían, de acuerdo al Pacto, el compromiso de:

- a) compatibilizar e instrumentar la legislación ambiental en sus respectivas jurisdicciones; y
- b) impulsar y adoptar políticas de educación, investigación, capacitación, formación y participación comunitaria conducentes a la protección y preservación del ambiente.

Por último, los suscriptores del **Pacto Federal Ambiental** reconocerían como un instrumento válido para la coordinación de la política ambiental en la Argentina al **Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)** en el que la Nación, representada por la **SRNDS**, asume la implementación de las acciones a desarrollar a fin de cumplimentar los contenidos del Acuerdo de referencia.

1.4.1. Coordinación Interjurisdiccional en materia de EIA

Como se desprende de lo explicitado anteriormente, están dadas todas las condiciones para que la coordinación interjurisdiccional en materia de **EIA** se produzca sin necesidad de crear nuevos mecanismos.

En efecto, hemos visto que el **COFEMA**, organismo permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre la Nación y los Estados Provinciales tiene entre sus varios objetivos particulares el de "exigir y controlar la realización de **estudios de impacto ambiental** en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales".

Dicho objetivo lleva implícito, precisamente, el propósito perseguido de que las EIA sean debidamente compatibilizadas y articuladas en las distintas jurisdicciones cuando los proyectos o actividades sujetos a aquéllas involucren a más de una de estas últimas.

Por otro lado, como se expusiera en el Capítulo III, la **SRNAH** resultaría el organismo encargado de "ejercer la coordinación interjurisdiccional en materia de EIA", constituyendo la "máxima instancia de referencia en la materia" y la "última instancia administrativa para dirimir conflictos".

Por otra parte, otro de los objetivos particulares del **COFEMA**, el de "constituir un banco de datos y proyectos ambientales", conformaría la base sobre la que podría apoyarse el registro de EIAs a llevar a cabo por la **SRNAH**.

Finalmente, el ***Pacto Federal Ambiental*** resultaría ser el instrumento político necesario para que los presupuestos mínimos a fijar por la **SRNDS** según el mandato emergente del Artículo Nº 41 de la Constitución Nacional, fueran tomados oportunamente como base por los Estados Provinciales en la confección de sus respectivas normativas de EIA.

1.4.2. Mecanismos de cooperación con otros organismos

Se ha visto en el Capítulo III que, entre las funciones a ejercer por la **SRNDS**, se hallan las de asesorar a organismos nacionales, provinciales y/o municipales en materia de EIA, las de asistir y cooperar con éstos en caso que los mismos así lo requiriesen y las de mediar o dirimir conflictos.

El asesoramiento de rutina a organismos nacionales, provinciales y/o municipales en materia de EIA cae dentro de las misiones y funciones específicas de la **SRNAH**, por lo que se trata de una tarea que debe ser llevada a cabo por su plantel profesional permanente y/o transitorio.

En otro orden de cosas, y en relación a las tareas a asumir por la **SRNDS** en cuanto a la evaluación global del sistema y a la concentración de la información correspondiente a los registros de consultores en materia de EIA llevados por los organismos nacionales sectoriales, las mismas se encuadran dentro de lo que constituye una supervisión de la política nacional en materia ambiental, razón por la cual se entiende que dichas funciones deberían ser desempeñadas por su propio plantel profesional.

**PROYECTO NACIONAL. Diputados Muller-Maurette.
Comisión Medio Ambiente CAMARA de DIPUTADOS de la NACION.**

Este Proyecto fue iniciado por Expte. Nº 6730-D-96, a fines del año próximo pasado, por los Diputados Nacionales Mabel Muller y Fernando Maurette de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Está precedido de Fundamentos, bastante extensos e interesantes, resultado de una ardua investigación del tema en el país, en el Mercosur, la Comunidad Económica Europea y los EE.UU. como país precursor.

Este Proyecto se inscribe en lo establecido por el art. 41 de nuestra Constitución Nacional, cuando fija que "...Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las Provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales...", de manera que entraría en la categoría de las denominadas "ley marcoambiental".

Conforme lo exponen sus autores en los Fundamentos, ha sido redactado sobre la base del Modelo de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para la Región, propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA- Oficina Regional para América Latina y el Caribe, que fue sometido a consideración del Parlamento Latinoamericano, y aprobado con modificaciones por la Comisión de Medio Ambiente de dicho Parlamento.

- Este Proyecto de ley no define a la Evaluación de Impacto Ambiental, no obstante reseñar algunas definiciones en sus Fundamentos..

Conforme a lo adelantado en cuanto a su carácter de Ley marco, en su art. 1 FIJA PRESUPUESTOS MINIMOS, que deben exigirse en los EIA, estos contenidos mínimos según se aclara serían los que otros autores y otras legislaciones denominan "Guías Metodológicas", con los requerimientos básicos a efecto de que la autoridad administrativa competente, complemente o puntualice por vía reglamentaria.

El Proyecto exige en su art. 2 que se efectúe una Declaración Jurada de impacto, lo que en la legislación comparada se denomina "Manifiesto", que es un documento que se presenta a la Autoridad de Aplicación a efectos de requerir Autorización, previo al ~~inicio de una actividad refiriendo la magnitud del impacto ambiental que provocará, lo que~~ luego servirá para evaluar la buena o mala fé del presentante, al analizar su presentación, lo que motivará la aplicación de las sanciones que la ley prevé.

En el art. 3 se establece la PRESUNCION de OBRAS o ACTIVIDADES consideradas RIESGOSAS para el ambiente, quedando determinar por vía reglamentaria las tres categorías de obras o actividades, conforme el riesgo presunto, según su localización, dimensiones, peligrosidad, volumen, y tipo de residuos, consumo energético y demás características.

Se establece en el art. 4 la Obligatoriedad del EIA para aquellos casos en que por Declaración Jurada o por estar prevista en el art. de Presunciones sean susceptibles de degradar el ambiente; no obstante también prevé la exigencia DE OFICIO o a pedido de terceros interesados, por resolución DEBIDAMENTE FUNDADA..

El art. 5 fija los Contenidos del EIA para la categoría de actividades de mayor riesgo presunto conforme al art. segundo, sin perjuicio de los demás requerimientos que se establezcan al dictar las reglamentaciones.

En el art. 6 crea el REGISTRO de PRESTADORES DE SERVICIOS DE LAS CIENCIAS del AMBIENTE, en el que inscribirán personas físicas o jurídicas que presten servicios profesionales, los que serán solidariamente responsables con el titular de la obra o actividad respecto a la veracidad de los datos del EIA.

Se creará un Registro Central y también Provinciales. y no se aceptarán EIA si no están suscriptos por Prestadores registrados y habilitados.

También establece en el art. 7 la PUBLICIDAD del Proyecto por el término de 5 días -a cargo del presentante- en el Boletín Oficial, en Diario nacional, provincial o local según alcance del Proyecto y en el Diario local de mayor circulación donde se asentará la actividad.

El art. 8 establece la RESERVA DE SECRETOS COMERCIALES, que podrá ser solicitada por el presentante.

En el art. 9 se refiere a la Audiencia Pública con la particularidad de que le otorga el carácter de. OPTATIVA, quedando a criterio de la Autoridad de Aplicación, ello se justifica en el sentido de que si bien la mayoría de las legislaciones es obligatoria, en las pocas leyes Provinciales existentes sobre EIA, en donde se previeron de igual forma, es muy poco lo que se las ha practicado.

El art. 10º se refiere a la Resolución y el plazo para dictar la aprobación o no del EIA presentado, y establece la posibilidad de condicionar la aprobación a la constitución de un Seguro de Responsabilidad Civil por daño al ambiente. Vencido el plazo para

dictar resolución definitiva sin expedirse se tendrá por aprobada, extremo que en un tema de la trascendencia que poseen las EIA como instrumento de preservación en la Gestión Ambiental, parece como de mucho riesgo dejarlo librado a la desidia o al exceso de tareas del funcionario de turno.

El art. 11 establece a la autoridad de aplicación la obligación de FISCALIZACION a posteriori de la aprobación.

El art. 12 fija un importante enumeración de incumplimientos con sus correlativas SANCIONES .

El art. 13 establece la creación de un FONDO NACIONAL para la Evaluación del Impacto Ambiental, fijando su integración y sus fines.

Conforme a lo previsto en el art. 14, el PEN deberá REGLAMENTAR esta ley en un plazo de 60 DÍAS corridos y fijar la AUTORIDAD de APLICACION..

2. ANTECEDENTES PROVINCIALES

2.1. Pcia. de CORDOBA LEY MARCO 7343- Dto. 3290/90 reglamenta Capítulo de EIA.

La Pcia. de Córdoba en el año 1985, dicta su Ley Provincial del Ambiente, dedicando el Capítulo. IX de la misma al IMPACTO AMBIENTAL, desde el art. 49 al 52.

Dicho Capítulo recién es reglamentado en el año 1990, a través del Dto. 3290/90.

En la ley no se define a los EIA sino que ello se realiza en el Dto. reglamentario.

Asimismo en el art. 52 de la ley se hace una enumeración de las actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente

La Autorización. está a cargo del, Consejo Provincial del Ambiente, creado en la citada ley marco, siendo la misma indispensable para el comienzo de ejecución de obra y exigido por todos los organismos de la Administración Pública, siendo expresamente prohibidas las obras u acciones que no cuenten con dicho requisito.

Por su parte, el **Decreto. Reglamentario**, define al EIA, y prevé un Procedimiento que consta de .3 ETAPAS:

- a) Informe de EIA a presentar por proponente de Proyecto.
- b) Información pública.

c) Valoración crítica de las actuaciones con **PRONUNCIAMIENTO FINAL**, fundado del CPA.

-Definición de **PROYECTO**.

Etapas de Avance del Proyecto:

- Idea, prefactibilidad, factibilidad y diseño.
- Concreción, construcción o materialización
- Operación de las obras o instalaciones.
- Clausura o desmantelamiento.
- Post clausura o post desmantelamiento.

En el Art. 5 se establece la **ADMISION** sólo de aquellos proyectos que contengan:

-a) fundamento científico en los procedimientos tecnológicos. y normas técnicas propuestas.

-b) Oferta de garantías reales y/o personales aceptables para el CPA.

En el Art. 6, se fijan los **REQUISITOS** de la presentación del Estudio e Informe., presentados con **firma de Profesional universitario competente**.

En el Art. 8, se establece que la Secretaría Técnica del CPA deberá dar **DIFUSION** por medio de prensa, dentro de los 10 días de presentado el Estudio e Informe de EIA, efectivizándose especialmente en el lugar de localización del Proyecto.

El Art. 10 establece que la presentación de dicho Estudio. e Informe. podrá efectuarse indistintamente ante la:

- Sec. Técnica del CPA.

.-Repartición pública que sea autoridad de aplicación en la materia que trate el Proyecto.

- o Municipalidad del lugar donde se localiza el Proyecto.

El art. 18 fija los **CONTENIDOS MINIMOS** del Estudios e Informes. de EIA, en una extensa enumeración de las exigencias y requerimientos mínimos que deben abarcar, a fin de presentar toda la información que se requiere para a evaluación del Proyecto presentado.

El Art. 21 se refiere a los **Criterios de Calidad Ambiental**, que son los emanados de Normas nacionales, provinciales o los más estrictos de Organismos internacionales de prestigio, como PNUMA, OMS, OPS, CEE, EPA y Consejo Federal del Ambiente de la Rep. Federal Alemana.

El Art. 22 establece que el CA puede solicitar apoyo técnico de organismos de indudable solvencias científico-técnica.

El Art. 23 se refiere a la VALORACION CRITICA, que deberá contener principales conclusiones, recomendaciones y condiciones de autorización del Proyecto. Si se rechaza, por no satisfacer requisitos de reguardo ambiental deberá fundamentarse.

Finalmente en el art. 24, se establece la actuación del Consejo Provincial del Ambiente para analizar la documentación presentada.

2.2.Pcia. de MENDOZA. Ley N° 5961. Dto. N°2109/94.

También la Pcia. de Mendoza, legisla el tema dentro de su Ley de Preservación del Medio Ambiente, dictada en el año 1992, en el Título V del **Impacto Ambiental**, desde el ART. 26 AL Art. 42.

En el Art. 26, define Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.), y en el Art. 27, establece que los proyectos de obras o actividades capaces de modificar, directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A), expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda o por las Municipalidades de la Provincia, quienes serán la autoridad de aplicación de la ley, según la categorización de los proyectos

El Art. 28, establece que la D.I.A. será exigida por los organismos centralizados o descentralizados de la Administración Pública provincial y/o municipal, quedando expresamente prohibido en el territorio de la Provincia, la autorización administrativa y/o la ejecución de actividades que no cumplan dicho recaudo, bajo pena de la aplicación de las sanciones previstas y sin perjuicio de la nulidad de las actuaciones administrativas que se hubieren iniciado.

En el Art. 29 se establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, integrado por las siguientes etapas:

- a. La presentación de la Manifestación General de Impacto Ambiental y, en su caso, la Manifestación Específica de Impacto Ambiental;
- b. La audiencia pública de los interesados y afectados;
- c. El dictamen técnico;
- d. La Declaración de Impacto Ambiental.

El Art. 30 establece que a los efectos de obtener la D.I.A., el proponente de las obras o proyectos, deber presentar ante el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda o el Municipio jurisdiccionalmente competente, la correspondiente Manifestación General de Impacto Ambiental, que tendrán carácter de declaración jurada y serán

suscriptas por profesionales idóneos en las materias que comprendan y debidamente habilitados.

El Art. 31 se refiere a la audiencia pública a la que se convocará a las personas físicas o jurídicas, potencialmente afectadas por la realización del proyecto y a las organizaciones no gubernamentales interesadas en la preservación de los valores ambientales que la presente ley protege.

El Art. 34 fija que la D.I.A. sin dictamen técnico y audiencia previa es nula.

El Art. 35 establece que previo a la emisión de la D.I.A., la autoridad de aplicación deberá considerar en los análisis de los resultados producidos en las distintas etapas del procedimiento, los siguientes criterios:

- a. El ordenamiento ecológico provincial, con sus subsistemas e interacciones;
- b. Las disposiciones legales y planes de manejo de las áreas protegidas naturales y urbanas;
- c. Los criterios ecológicos para la protección de la flora y de la fauna, para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y para la protección del ambiente;
- d. Las regulaciones sobre ordenamiento territorial y todas aquellas otras concernientes a la preservación ambiental;
- e. Los objetivos de la política ambiental provincial, la cual armonizar las necesidades del desarrollo económico y social con las del sostenimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Provincia.

El Art. 39 establece las Sanciones ante las violaciones a las disposiciones de la ley.

El Art. 40 fija el costo de las Manifestaciones de Impacto Ambiental será soportado por el proponente del proyecto. La reglamentación determinará su valor atendiendo a cada tipo de emprendimiento.

2.3.Pcia. de SAN JUAN -Ley 6.571-Evaluación del Impacto Ambiental.

San Juan legisló sobre éste tema en el año 1994, adoptando la misma ley de la Pcia. de Mendoza, por lo que le caven las mismas apreciaciones efectuadas al tratar la Ley de dicha Provincia.

Esta ley aún no ha sido reglamentada, no obstante ello, en el decreto actualmente a la firma del PE, han innovado respecto de las SANCIONES, receptándolas de la reglamentación de la legislación minera provincial.

3. NUEVO CUYO - MERCOSUR

Es indudable en lo tiempos que corren donde se impone la "globalización", que resulta ineludible promover e incrementar el proceso de integración regional en el contexto nacional, a través del Nuevo Cuyo y desde allí hacia el Mercosur, máxime teniendo en cuenta las posibilidades de desarrollo que ello implica, tal como se ha analizado y exployado en el trabajo anterior presentado sobre "Ordenamiento Territorial".

Nuevo Cuyo- Antecedentes Legislativos

El 25 de Enero de 1988, en la Pcia. de San Juan se suscribió El Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo, donde entre otros puntos acordaron "...Fortalecer la integración de la Región mejorando los medios de comunicación y transporte, promoviendo la oferta de bienes y servicios regionales, tanto en el plano nacional como internacional y la ejecución de emprendimientos productivos y comerciales con otros países, especialmente los latinoamericanos..." y "... Promover una mayor integración física de las Provincias signatarias con la hermana República de Chile, procurando la infraestructura necesaria para su consecución y el incremento de los flujos de productos y servicios...";

Dicho Acuerdo luego fue ampliado y entre sus agregados se estableció: "...**ARTICULO 7º.-Priorizar el dictado de todas las normas legales y de ejecución de los emprendimientos para la defensa ecológica del medio ambiente, y la reposición de todos los recursos naturales renovables...**"

Luego también se suscribió El Pacto Legislativo Ambiental del Nuevo Cuyo , firmado el 29 de Agosto de 1992, y más recientemente a fines de 1996, se reunieron nuevamente los Legisladores del Nuevo Cuyo y en la oportunidad, dentro de los temas ambientales abordaron la legislación minera y la problemática de los residuos y repositorios nucleares.

Asimismo, nuestra Provincia debe continuar, junto a las Pcias del Nuevo Cuyo, en el camino emprendido desde la adhesión y reglamentación de la Ley de Residuos Peligrosos para contar con los MARCOS JURÍDICOS faltantes, ya que si bien la Nación a través de su órgano ambiental de mayor jerarquía, la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, actualmente Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, debe convocar al COFEMA para el dictado de PRESUPUESTOS MINIMOS, que viene llevándose a cabo con bastante lentitud, las Provincias. también pueden avanzar en darse su propia normativa y en todo caso, a posteriori llevar su posición al debate en el que se trate la ley nacional, y todo ello en

virtud al Dominio Originario que las Pcias tienen sobre sus recursos naturales y el deber constitucional de preservarlos.

Mercosur, Incidencia y antecedentes normativos

Tal como se expresaba en el anterior trabajo sobre Ordenamiento Territorial, "es la hora del desarrollo local, de la región concertada, de la reformulación de una nueva estrategia productiva formulada desde abajo, que se ajuste a las reglas del mercado, y a la competencia interregional. En ella será fundamental la acción de los gobiernos provinciales y locales, como así también la estrategia empresarial que le permite readecuarse en eficiencia, productividad y costos a los patrones internacionales"

"...El impacto inicial del MERCOSUR y la política de apertura es muy heterogénea y está marcado por las asimetrías entre las economías de los países.

"...Esta política de ordenamiento territorial deberá también tener presente los aspectos relevantes de la transición productiva con la incorporación de tecnología, las mutaciones tecnoproductivas, las posibilidades de las empresas de fragmentar sus procesos productivos con la consiguiente desconcentración espacial aumentando su vinculación y articulación..."

El MERCOSUR y la integración con Chile ya han comenzado a manifestarse espacialmente pero en la conformación del espacio futuro se superponen, además, muchos otros factores como el desarrollo sustentable; las posibilidades del mercado asiático; los avances tecnológicos aplicados a los transportes, comunicaciones e informática; la carrera competitiva de la globalización; etc."

La armonización en materia jurídica y económica y la eliminación de las barreras fronterizas abren la posibilidad para una movilidad espacial de las empresas antes limitada por diferentes tipos de trabas que establecían las legislaciones de cada país".

"...Las decisiones empresariales de localización suponen el análisis de diversas características de los lugares para su instalación, en consideración con los costos de producción. A nivel internacional parecen cobrar importancia la calificación de la mano de obra, la existencia de eficaces redes de transporte y comunicaciones y un entorno agradable para el desempeño social.

Es así que en pos de ese camino de integración por el que se está transitando, uno de los temas ineludibles e inexorables, es la armonización legislativa, por ello urge

que nuestro país dé un rápido avance en la sanción de leyes ambientales, desde la Ley Gral. del Ambiente, cuyo sustento es el citado art. 41 de la Constitución Nacional y las leyes específicas, como es el caso de la ley sobre EIA, ya que como surge del presente trabajo, el resto de los países del Mercosur ya cuentan con dicha legislación:

- **Brasil: Ley N° 6938/81** sobre Política Nacional de Medio Ambiente, que incluye la EIA, y que fue reglamentada en 1983.

- **Chile: Ley N° 19300/94** Bases del Medio Ambiente, que incluye EIA

- **Uruguay: Ley 16.466/94** de Evaluación del Impacto Ambiental.

- **Paraguay: Ley 294/93** de EIA

- **Bolivia: Ley 1333** sobre EIA

Por ello, resulta oportuno recordar nuevamente las *recomendaciones del Banco Mundial en su informe "Argentina. Managing Environmental Pollution: Issues and Options" (Report N° 14070-AR. Octubre 1995) según el cual el proceso de EIA se haría mucho más transparente si se compararan los costos por daño social con los beneficios de un proyecto o actividad determinados, para lo cual los organismos responsables deberían estimar precios sombra de diferentes daños ambientales a partir de análisis económicos. Ello permitiría que dicho proyecto o actividad resulte económicamente factible recién sólo cuando hayan sido tomadas en cuenta todas las externalidades sociales y ambientales.*

Finalmente, debe remarcarse nuevamente, el "Principio 17° de la Declaración de Río", surgido de ECO92, donde se establece imperativamente que en todos los países debe emprenderse la evaluación del impacto ambiental, reiterando la temática específicamente en los principios 2°, 12° y 19° de dicha Declaración.

II)-CONTACTOS CON ORGANISMOS PROVINCIALES Y NACIONALES, para interactuar tomando la experiencia de otros organismos sobre el tema, y luego analizarlo y adecuarlo a nuestra propia realidad.

I- Organismos Provinciales

1- Relevamiento en la Provincia de SAN LUIS

El primer relevamiento se efectuó en nuestra Provincia, a efectos de evaluar el conocimiento sobre la temática del Impacto Ambiental y sobre todo la **NECESIDAD** de su implementación para San Luis.

En cuanto a la **necesidad** de su tratamiento ello surgió y quedó evidenciado en diversas Jornadas ambientales organizadas por la Provincia o en las que participó, tales como el Taller Provincial del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, organizada por el Gobierno de la Provincia de San Luis, INTA y Universidad Nacional de San Luis, los días 14 y 15 de Agosto de 1996, en donde surgió como inquietud de los participantes.

Luego en Noviembre del 96 la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia, organizó el Taller Provincial de Conservación y Uso de la Biodiversidad, en donde en una de sus conclusiones, los participantes señalaron la necesidad de contar con una legislación sobre EIA.

En dicha oportunidad, también se reunieron los titulares a cargo de las áreas ambientales del Nuevo Cuyo y el día 29/11/96 suscribieron un Acta, en donde convinieron solicitar al Presidente de la Honorable Legislatura del Nuevo Cuyo, entre otras cosas "...Tomar como base para el tratamiento de las leyes provinciales en materia ambiental...el Pacto Legislativo Ambiental del Nuevo Cuyo, firmado el 29/8/92..."

Esta misma inquietud fue manifestada por Municipios de la Provincia, tales como el de Villa Mercedes, en cuanto a su emprendimiento del Parque Provincial Costanera Río Quinto, y el de Merlo en cuanto a emprendimientos privados al pie de los Comechingones o caminos a construirse en la zona.

Por otro lado, en contacto con áreas de Gobierno que tienen a su cargo llevar adelante las grandes obras previstas para 1997, tales como Dirección Provincial de Vialidad, EPIH, y la Coordinación de la Unidad Ejecutora Provincial, los funcionarios de dichas áreas fueron coincidentes en remarcar la necesidad de contar con pautas claras al respecto, partiendo de una norma básica para la Provincia y capacitando personal de sus áreas en relación a la temática.

2- Provincia de CORDOBA

La temática del Impacto Ambiental en la Provincia de Córdoba está a cargo del área de la Subsecretaría de Salud y Medio Ambiente, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 7343/85 -Ley Provincial. del Ambiente-, y su Dto. reglamentario N° 3290/90.

Los antecedentes de dicha ley son las legislaciones de EE.UU., Comunidad Económica Europea, Francia y Canadá.

La aprobación de los EIA están a cargo del Consejo Provincial del Ambiente, los que llegan para su tratamiento con un dictamen del área competente, según la temática.

Dicho Consejo se reúne en su totalidad, dos veces por año, en tanto que el Consejo reducido integrado por las áreas de Turismo, Dirección de Agua y Saneamiento, Agricultura, Salud, Minería, Industria y Medio Ambiente, se encuentran semanalmente, conforme a los temas que vayan surgiendo y es convocado por el Subsecretario de Medio Ambiente, máxima autoridad ambiental, o por el Director de Programación y Acción Ambiental.

Para integrar el Consejo, cada área nombra un representante titular y un alterno, siendo éste último técnico de carrera.

Los EIA están limitados a las actividades comprendidas en el Anexo 1 de la Ley, que deben someterse en forma obligatoria, en tanto el Anexo 2 enumera las facultativas y dichas actividades para su autorización no llegan al Consejo, sino que las autorizan los organismos competentes..

Los Municipios participan en el Consejo, pero no tienen voto, por lo general. con Informes escritos previos.

Luego de seguir las pautas fijadas en el Procedimiento, la aprobación de la EIA sale por RESOLUCION, suscripta por los organismos intervinientes.

No se cobra ninguna tasa para la evaluación del impacto ambiental.

3- Provincia de MENDOZA

En la Provincia de Mendoza rige la Ley 5961 -Ley de Preservación del Medio Ambiente- dedicando el Título V a la Evaluación del Impacto Ambiental y un Anexo con el Listado de actividades sometidas al proceso de EIA.

Fue reglamentada por el Dto. 2109/94.

La autoridad de aplicación es la **Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano**, dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente.

Dentro de dicha Dirección se está trabajando para crear un área específica, o Unidad de Gestión, que tendrá a su cargo la implementación de la normativa de EIA y fundamentalmente a la tarea de CONTRALOR POSTERIOR.

En cuanto a la experiencia que cuentan desde la sanción de la Ley y su reglamentación, es bastante amplia, fundamentalmente en cuanto a las AUDIENCIAS PUBLICAS, en algunos casos con mucha participación de la ciudadanía y con muy buenos resultados, siendo las más convocantes las que tratan temas viales y de petróleo.

Esta experiencia del gobierno provincial contrasta con la de los Municipios que recién están comenzando a implementarla.

En cuanto al Registro de Consultores, si bien no surge de la ley vigente, lo están comenzando a implementar y posee aproximadamente veinte Consultorías provisorias, hasta tanto se las norme.

Actualmente se han otorgado varias aprobaciones a las Declaraciones de Impacto Ambiental presentadas.

Ahora se han avocado principalmente a reforzar la infraestructura del área que les permita lograr un seguimiento sobre las actividades aprobadas, lo que implica mejorar el PODER de POLICIA, casi inexistente, y también se están replanteando el tema de las SANCIONES previstas en la Ley, ya que no le resultan eficaces.

4.-Provincia de SAN JUAN

En la Provincia de San Juan rige la Ley N° 6571 de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya reglamentación está pronta a ser sancionada, y al igual que la citada ley, tiene como base a la Ley de Mendoza.

No obstante ello, en el decreto actualmente a la firma del PE, han innovado respecto de las SANCIONES, receptándolas de la reglamentación de la legislación minera provincial.

La autoridad de aplicación de la misma es la **Dirección de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental**, dependiente del Ministerio de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente.

Si bien recién se encuentran en las primeras etapas de implementación, han avanzado con la elaboración del decreto reglamentario.

Por ello, aún no han otorgado ninguna aprobación de Declaración de Impacto Ambiental.

La legislación no prevé el Registro de Consultores, pero están tratando el tema para luego normarlo.

5. Pcia de LA RIOJA

También se mantuvieron contactos con autoridades ambientales de La Rioja, quienes informaron que si bien aún no cuentan con una ley sobre la Evaluación del Impacto Ambiental, se encuentran en una etapa de investigación y tratamiento de la temática para sancionarla.

Dicha información fue suministrada por la **Dirección General del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable**.

Además, en reuniones mantenidas con titulares de las áreas ambientales del Nuevo Cuyo se ha coincidido en la necesidad de dictar las normas ambientales faltantes, en pos de ir armonizando pautas en la región.

6-ENTRE RIOS

En virtud a una publicación efectuada por el Gobierno de Entre Ríos, con motivo de los avances operados en la temática de EIA en dicha Provincia, se han tomado las siguientes reflexiones y experiencias:

-IMPORTANCIA DE LAS EIA- Gob. de Entre Ríos.

En un trabajo publicado por la Unidad Especial de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno de Entre Ríos, sobre EIA, referente a la publicación de los resultados del estudio de EIA de la vinculación física entre Victoria y Rosario, se expresan los siguientes conceptos:

"...Entre Ríos ha fijado cuestiones prioritarias a considerar en el tratamiento de los temas ambientales, donde los EIA, juegan un papel fundamental para alcanzar a disfrutar de un medio ambiente sustentable y donde el proceso del desarrollo permita lograr una mejor calidad de vida.

En el caso del Proyecto de vinculación física entre Victoria y Rosario, y para completar los estudios tendientes a elaborar la documentación para la licitación por el

régimen de concesión de obra pública para la construcción y explotación de las obras, se decidió realizar una EIA...”

“...Los términos de referencia en función de los cuales se llamó a concurso establecían como objetivo: “Formular la Evaluación de Impacto Ambiental EIA sobre el medio natural y socio-económico en las áreas de afectación e influencia, de las variantes de las alternativas seleccionadas en la Prefactibilidad del Proyecto de Vinculación Física entre Victoria (Pcia. de Entre Ríos) y Rosario (Pcia. de Santa Fé)...”

“...El estudio contratado ha llegado a su fin, en el marco de un proceso en el que se trabajó interrelacionadamente con los equipos provinciales, y para el que se celebraron una suerte de audiencias públicas en Victoria y en Rosario, donde se dieron a conocer los resultados de los estudios, convirtiéndose en una de las primeras experiencias de este procedimiento metodológico de participación...”

“...Deseamos que la experiencia recogida nos sirva como elemento dinamizador en el empleo de esta herramienta de la planificación ambiental: las EIA, y que nos sirva a los entrerrianos para imaginar, en el marco de un proceso de compromiso técnico y creativo, cómo habremos de abordar otras evaluaciones que debemos efectuar, fundamentalmente acompañando los grandes proyectos en que Entre Ríos está comprometida: el gasoducto mesopotámico, las presas y los canales de riego, la construcción de nuevas rutas, etc...”

Es así que el Gobierno de Entre Ríos, con la colaboración del Banco Mundial, junto a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano y el IIED -América Latina- desarrollaron en Paraná un “Seminario-Taller de Entrenamiento en Evaluación de Impacto Ambiental: Región Nordeste”, entre Junio-Julio de 1993, constituyendo el mismo, la primer experiencia a nivel regional y nacional en capacitación de recursos humanos para la formulación de EIA.

II) Organismos Nacionales

En cuanto al contacto con organismos o autoridades de la órbita nacional, dos fueron los principales referentes:

1) Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación.

a) PRODIA, -Programa de Desarrollo Institucional Ambiental

El PRODIA, a través de la contratación de Consultores, viene llevando a cabo el análisis y relevamiento de la Evaluación del Impacto Ambiental.

A partir de allí al consultarlos sobre el tema, ofrecieron material de sus investigaciones sobre el tema, que han sido ampliamente citados en el presente trabajo.

b) Dirección de Residuos Peligrosos

Independientemente de dicho material, se tomó contacto con el Director de Residuos Peligrosos, quien informó que se está comenzando a implementar la exigencia de Declaración de Impacto Ambiental establecida en el art. 60 de la Ley 24051.

c) Registro de Consultores Ambientales-BICE

También se tomó un contacto con el responsable del Registro de Consultores Ambientales de la Secretaría, que informó que recién se está implementando dicho Registro mediante convenio con el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., la SRNDS resulta la encargada de reglamentar las metodologías de EIA y de implementar el Registro de Consultoría Ambiental para todos aquellos proyectos incluidos en el Programa Global de Crédito Multisectorial, declarado de interés nacional mediante Decreto del PEN N° 420/94 y cuyo organismo ejecutor, según el Decreto antedicho, es el BICE.

d) Administración de Parques Nacionales.

Asimismo también se contactó al Director de Áreas Naturales, quien confirmó que la Administración de Parques Nacionales, conforme a la Ley vigente, exige Evaluaciones de Impacto Ambiental, previo a la constitución de una nueva área protegida.

La Administración de Parques Nacionales, exige la realización de diversos niveles de evaluación ambiental, según su magnitud, a todos los proyectos a emprender dentro del ámbito jurisdiccional de dicho organismo. La APN se reserva el derecho de efectuar Auditorías Ambientales para el caso de emprendimientos y actividades preexistentes.

Estos estudios sirven a la APN para evaluar la factibilidad y conveniencia de ejecutar tales proyectos, minimizar los impactos perjudiciales negativos de obras, actividades o servicios realizados en áreas protegidas y prevenir los que pudieran resultar de los proyectos propios de la APN o que requieran su autorización.

2) Comisión de Medio Ambiente de la CAMARA de DIPUTADOS de la NACION

Dicha Comisión se encuentra actualmente abocada a los Presupuestos mínimos, pero no obstante acaba de generar un Proyecto de Ley sobre el Régimen

Legal para la Evaluación previa del Impacto Ambiental de los Proyectos de obra o actividades.

Dicho Proyecto fue presentado por la Presidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Diputada Mabel H. Muller y el Diputado Fernando W. Maurette, por Expte. N° 6730-D-96, tomando estado parlamentario en el mes de diciembre de 1996.

Conforme lo exponen sus autores en los Fundamentos, ha sido redactado sobre la base del Modelo de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para la Región, propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA-Oficina Regional para América Latina y el Caribe, que fue sometido a consideración del Parlamento Latinoamericano, y aprobado con modificaciones por la Comisión de Medio Ambiente de dicho Parlamento.

III)-ESTRUCTURACION Y ELABORACION DEL PROYECTO

San Luis, de de 1997.

V I S T O :

El expte. N° sobre el Proyecto de Ley de Evaluación del Impacto Ambiental -E.I.A.-, para la Pcia. de San Luis, y,

CONSIDERANDO:

Que las evaluaciones de impacto ambiental constituyen un instrumento de gestión para prevenir o mitigar los conflictos ambientales, ampliamente difundida y utilizada en muchos países y es considerada como una condición necesaria -aunque no suficiente- para alcanzar un desarrollo económico ambientalmente sustentable.

Que nacen en los países industrializados, como herramientas metodológicas orientadas a una cuantificación y cualificación sistemática de los efectos que tienen las actividades humanas sobre el ambiente.

Que dicho estudio de impacto ambiental constituye un requisito administrativo de excepción que sólo deben realizar aquellas actividades incluídas expresamente en la norma, o aquellas declaradas mediante Declaración Jurada, también prevista en la ley y finalmente aquellas que a criterio de la autoridad de aplicación, debidamente fundado, considere que debería realizar tal estudio.

Que el procedimiento administrativo para la aprobación de la evaluación de impacto ambiental es el mecanismo institucional por el cual las personas públicas o privadas someten dicho estudio a la consideración de la autoridad pública ambiental.

Que dada la función de la autoridad competente, debe dotársela de la infraestructura básica necesaria para llevar a cabo los objetivos de la norma, por lo que la decisión política de sancionar la ley debe ir acompañada de la decisión de hacerla cumplir desde el Estado.

Que sin una actividad de fiscalización posterior, el procedimiento está fatalmente destinado a ser ineficaz, ya que el monitoreo y contralor cierran el circuito y permiten introducir acciones complementarias o modificatorias de ajuste en las actividades, a fin de morigerar o evitar los impactos ambientales no previstos.

Que, asimismo, resulta oportuno recordar las recomendaciones del Banco Mundial en su informe "Argentina. Managing Environmental Pollution: Issues and Options" (Report N° 14070-AR. Octubre 1995) según el cual el proceso de EIA se haría mucho más transparente si se compararan los costos por daño social con los beneficios de un proyecto o actividad determinados, para lo cual los organismos responsables deberían estimar precios sombra de diferentes daños ambientales a partir de análisis económicos. Ello permitiría que dicho proyecto o actividad resulte económicamente factible recién sólo cuando hayan sido tomadas en cuenta todas las externalidades sociales y ambientales.

Que también debe recordarse y debe remarcarse, el "Principio 17º de la Declaración de Río", surgido de ECO92, donde se establece imperativamente que en todos los países debe emprenderse la evaluación del impacto ambiental, reiterando la temática específicamente en los principios 2º, 12º y 19º de dicha Declaración.

Que en pos del camino de integración regional por el que se está transitando, uno de los temas ineludibles e impostergables, es la armonización legislativa, por ello urge que nuestro país dé un rápido avance en la sanción de leyes ambientales, desde la Ley General del Ambiente, cuyo sustento es el citado art. 41 de la Constitución Nacional, a las leyes específicas, como es el caso de la ley sobre EIA, ya que el resto de los países del Mercosur ya cuentan con dicha legislación:

Que nuestra Provincia debe continuar el camino emprendido de la Regionalización, -desde abajo hacia arriba-, junto a las Provincias del Nuevo Cuyo, en donde desde 1988 en que se firmó el Acuerdo de Integración Económica, y que, en el Documento Ampliatorio, en uno de sus puntos -el art. 7-, expresa, **"Priorizar el dictado de todas las normas legales y de ejecución de los emprendimientos para la defensa ecológica del medio ambiente, y la reposición de todos los recursos naturales renovables..."**, a lo que después se sumó El Pacto Legislativo Ambiental del Nuevo Cuyo, firmado el 29 de Agosto de 1992, y como antecedente más reciente a fines de 1996, se reunieron nuevamente los Legisladores del Nuevo Cuyo, en donde, entre otros temas, abordaron la legislación minera y la problemática de los residuos y repositorios nucleares.

Que de ésta manera nuestra Provincia, continuará su desarrollo y crecimiento en forma integral, armónica y equilibrada, dentro de los carriles de la sustentabilidad, dando cumplimiento a la Constitución Provincial, conforme lo establece el art. 47.

Por ello,

**EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY**

Art. 1º: CONCEPTO: Entiéndese por Evaluación de Impacto Ambiental, -E.I.A.- a los fines de ésta Ley, al procedimiento destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, las consecuencias o efectos que acciones o proyectos públicos o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la Provincia.

Art. 2º: DECLARACION de IMPACTO AMBIENTAL Todos los proyectos de obras o actividades susceptibles de degradar el ambiente del territorio provincial o afectar a la calidad de vida de las personas, enumeradas en el Anexo 1 de la presente ley, deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A), expedida por la autoridad de aplicación de ésta ley. a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, que tendrá el carácter de declaración jurada.

Sin perjuicio de la declaración jurada, la autoridad de aplicación podrá exigir, de oficio o a pedido de terceros interesados, la realización del estudio del impacto ambiental de obras o actividades, susceptibles de degradar el ambiente del territorio provincial o afectar a la calidad de vida de las personas, por resolución debidamente fundada.

Art. 3º: OBLIGATORIEDAD DE LA D.I.A. La D.I.A. será exigida por los organismos centralizados o descentralizados de la Administración Pública provincial y/o municipal con competencia en la obra y/o actividad, quedando expresamente prohibido en el territorio de la Provincia, la autorización administrativa y/o la ejecución de actividades que no cumplan dicho recaudo, bajo pena de la aplicación de la sanciones previstas por la presente ley.

Las obras y/o actividades, enumeradas en el Anexo 1, que se encuentren en ejecución, tendrán un plazo que se determinará en la reglamentación, para obtener la D.I.A.:

Art. 4º: CONTENIDOS MINIMOS del ESTUDIO del IMPACTO AMBIENTAL. La autoridad de aplicación requerirá, entre otros datos exigibles, los siguientes:

1-Datos completos del o los titulares de la obra o actividad y del consultor o responsable técnico.

2-Objetivos y beneficios socioeconómicos del Proyecto, en detalle

3-Descripción del Proyecto: Dimensiones, localización, tecnología, procesos, insumos, productos, subproductos y desechos, protección ambiental: Medidas de prevención, controles, monitoreos.

4-Descripción de la situación ambiental existente: Componentes biofísicos y socio-económicos.

5-Identificación, valoración, e interpretación de los posibles impactos del Proyecto sobre cada componente ambiental y sobre el conjunto (efectos combinados).

6-Identificación, valoración e interpretación de posibles efectos del ambiente sobre la obra y/o acción proyectada.

7-Proyectos alternativos u opcionales y fundamentación de sus conclusiones.

8-Informe sintético, resumen de los estudios realizados y sus conclusiones.

Art. 5º: ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, estará integrado por las siguientes etapas:

1. La presentación del Estudio de Impacto Ambiental;

2. La audiencia pública;

3. El dictámen técnico.

4. La Declaración de Impacto Ambiental.

Las etapas individualizadas como 3. y 4. se cumplirán en forma simultánea.

Art. 6º: REGISTRO de CONSULTORES AMBIENTALES. El estudio del impacto ambiental a que se refiere el artículo 4º será realizado por personas físicas o jurídicas debidamente habilitadas por la autoridad de aplicación, la que no dará curso a aquellos estudios que no sean suscriptos por el titular de la obra o actividad y por el o los consultores registrados y habilitados.

A tal efecto, la autoridad de aplicación pondrá en funcionamiento un Registro de Consultores Ambientales, y determinará los requisitos de idoneidad científica y técnica, como también el procedimientos para su inscripción.

Dichos consultores, habilitados e inscriptos, serán solidariamente responsables con el titular de la obra o actividad por la veracidad de los datos de base que aporten en los estudios del impacto ambiental.

Art. 7º: PUBLICIDAD: La autoridad de aplicación establecerá un sistema de información pública absolutamente abierto, a fin de dar publicidad a los Estudios de Impacto Ambiental que le sean elevados, como así también las opiniones públicas y dictámenes técnicos que se produzcan durante el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Art. 8º: AUDIENCIA PUBLICA: La autoridad de aplicación deberá convocar a audiencia pública a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, potencialmente afectadas por la realización del proyecto y a las organizaciones no gubernamentales interesadas en la preservación del ambiente, para debatir los aspectos que hacen al impacto ambiental del proyecto y las acciones necesarias para prevenir o mitigar tal impacto.

Art. 9º: DICTAMEN TECNICO. La Autoridad de Aplicación podrá recabar el dictamen técnico de personas reconocidamente idóneas en el tema de que se trata o de Universidades o Centros de Investigación públicos o privados, respecto a las de Estudios de Impacto Ambiental presentadas.

La autoridad de aplicación deberá, asimismo, pedir dictamen sobre la repercusión en el ambiente a los organismo y reparticiones públicas con incumbencia y/o competencia en el proyecto.

Art. 10º: CRITERIOS PARA LA EMISION DE LA D.I.A.: Previo a la emisión de la D.I.A., la autoridad de aplicación deberá considerar en los análisis de los resultados producidos en las distintas etapas del procedimiento, los siguientes criterios:

- a).El ordenamiento ecológico provincial, con sus subsistemas e interacciones;
- b).Las disposiciones legales y planes de manejo de las áreas protegidas naturales y urbanas;
- c).Los criterios ecológicos para la protección de la flora y de la fauna, para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y para la protección del ambiente;

- d). Las regulaciones sobre ordenamiento territorial y todas aquellas otras concernientes a la preservación ambiental;
- e). Los objetivos de la política ambiental provincial, la cual armonizará las necesidades del desarrollo económico y social con las del sostenimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Provincia.

Art. 11º: DECLARACION de IMPACTO AMBIENTAL.-D.I.A.- PLAZOS: Vencido el plazo que determine la reglamentación para dar a publicidad el Proyecto presentado, y efectuada la audiencia pública, la autoridad de aplicación, dictará la D.I.A. correspondiente, dentro de los 90 días corridos, en la que podrá:

- a. Autorizar la realización de la obra o actividad en los términos y condiciones señalados en los EIA presentados;
- b. Autorizar la realización de la obra o actividad proyectada, pero condicionada al cumplimiento de las Instrucciones Modificadoras de la obra o actividad;
- c. Denegar la autorización, fundamentando dicha medida.

Art. 12º: FISCALIZACION: Corresponde a la autoridad de aplicación o a quien ella delegue, fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y de las condiciones de hecho en base a las cuales se aprobó la obra o actividad.

Art. 13º: MEDIDAS y SANCIONES: La autoridad de aplicación podrá ordenar la paralización de las obras o actividades efectuadas sin la D.I.A., como así también disponer la demolición o destrucción de las obras realizadas en infracción, siendo los costos y gastos a cargo del transgresor.

Las violaciones a las disposiciones de la presente ley serán reprimidas con las siguientes penas:

- a. Apercibimiento;
- b. Multa
- c. Clausura e inhabilitación.

A los efectos de determinar la sanción, la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta la gravedad de la transgresión; el riesgo o daño realizado al medio ambiente y la reincidencia.

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera imputarse al infractor.

Art. 14º: TASA: La autoridad de aplicación queda facultada para fijar una tasa a cargo del titular de la obra o actividad comprendida en ésta ley, atento al tipo de emprendimiento, la que no podrá exceder del costo correspondiente al del estudio de factibilidad técnica y económica del mismo.

Art. 15º: FONDO: Créase el Fondo Provincial para la Evaluación del Impacto Ambiental, que tendrá por objeto sostener y financiar las actividades que ésta ley pone a cargo de la autoridad de aplicación, como así también la capacitación de sus recursos humanos o la contratación de especialistas. El fondo será administrado por la Autoridad de Aplicación, y estará integrado por los siguientes recursos provenientes de:

- a) Multas por aplicación de la presente.
- b) Tasas que fije la autoridad de aplicación de ésta ley.
- c) Partidas presupuestarias que puedan serle asignada por la Ley de Presupuesto.
- d) Subvenciones, donaciones y legados que reciba.
- e) Los recursos que contemplen las leyes especiales.
- f) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.
- g) Cualesquiera otros que reciba de Acuerdos, Convenios celebrados con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

Art. 16º: AUTORIDAD de APLICACION. REGLAMENTACION: El Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días corridos, reglamentará la presente ley e indicará el organismo de su dependencia que revestirá el carácter de autoridad de aplicación.

Art. 17º: DISPOSICION COMPLEMENTARIA: El Listado de Actividades sometidas a EIA, consignada en al Anexo 1, que consta de una (1) foja, forma parte integrante de la presente ley, el que podrá ser ampliado por la autoridad de aplicación, asegurando la más amplia difusión.

Art. 18º: De forma.

ANEXO I

Listado de Actividades sometidas a EIA

- 1. Generación de energía hidroeléctrica, nuclear y térmica.**
- 2. Tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y domiciliarios.**
- 3. Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales utilizados en la generación de energía nuclear, en cualquiera de sus formas**
- 4. Empreimientos mineros.**
- 5. Actividad de explotación de recursos naturales renovables y no renovables.**
- 6. Actividades que modifiquen los paisajes.**
- 7. Construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos y cualquier otro conductor de energía o sustancias.**
- 8. Conducción y tratamiento de aguas.**
- 9. Proyectos de hidráulica agrícola.**
- 10. Construcción de embalses, presas y diques.**
- 11. Administración y tratamiento de aguas servidas urbanas y suburbanas.**
- 12. Localización y modificación de parques y complejos industriales.**
- 13. Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas y aeropuertos.**
- 14. Emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes.**
- 15. Emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos y balnearios.**
- 16. Cementerios convencionales y cementerios parques.**
- 17. Intervenciones de posibles aperturas de calles y remodelaciones viales.**
- 18. Actividad de ordenamiento rural.**
- 19. Todas aquellas obras o actividades que puedan afectar directa o indirectamente el equilibrio ecológico del territorio provincial.**

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
BIBLIOTECA
